

Agosto 31 de 1973

28ª REUNION — 26ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, vicepresidente 1º del Honorable Senado; del doctor AMERICO ALBERTO GARCIA, vicepresidente 2º del Honorable Senado, y del doctor ALBERTO M. FONROUGE, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales

Presente en la sesión, e invitado a ocupar una banca por la Presidencia, el señor senador chileno don TOMAS PABLO ELORZA, presidente del Parlamento Latinoamericano

Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, José Antonio
AVALOS, Pedro Isaac
BARBORA de NASIF, Yamili
BARONI, Danilo Luis
BELENGUER, Emilio
BENI, Juan Carlos E.
BLANCO, Rodolfo E.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo Norvel
BRIZUELA, Guillermo Ramón
CACERES, Rubén Osvaldo
CÁMPORA, Pedro L.
CANTONI, Apolo
CERRO, Francisco Eduardo
CHAILLE, Juan Carlos
D'AGOSTINO, Lucio Roque
DÍAZ BIALET, Alejandro
ELÍAS, Florencio
ESPERANZA, Joaquín Horacio
EVANS, Carlos H.
FONROUGE, Alberto M.
FRANCO, Carlos A.
FROIS, Domingo Andrés
FRUGOLI, Amadeo Ricardo
GARCÍA, Américo Alberto
GARCÍA, Justino
HERRERA, Dermidio Fernando L.
HERRERA, José Jorge
LEÓN, Luis A.
LORENZO, Jorge Luis
LORENZO, Ramón
LUDER, Ítalo A.
LUNA, Pedro Antonio
MANCINI, Omar A.
MARTIARENA, José H.

MARTÍNEZ, Julio César
MAYA, Héctor Domingo
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.
MOREIRA, Miguel Orlando
MORENO, Ramón Enrique
MURGUÍA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio Oscar
PAZ, Eduardo Alberto
PENNISI, Afrio
PERETTE, Carlos H.
PERONI, Carmelo
POSE, Jorge Juan
PUGLIESE, Juan Carlos
RODRÍGUEZ, Ginés Froilán
ROMERO, Humberto Antonio
SALAS CORREA, Luis I.
SALMOIRAGHI, José César
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
VAI, Buenaventura Justo
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON AVISO:

ANGELOZ, Eduardo César
BRIZUELA, Hugo Genaro
CARNEVALE, Luis
CARO, J. Armando
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
DE LA RUA, Fernando
GRUBISICH, Pablo Eliseo
JAUREGUI, Rafael Zenón
LOSADA, Mario
MUNIAGURRIA, Camilo
SAADI, Vicente Leónides
SAPAG, Elías
VALLE de GONZÁLEZ, Leni Rosa
VIVAS, Angel Juan Gregorio

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicación de la Presidencia. (Página 1158.)
- II.—Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita acuerdos. (Página 1158.)
- III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aceptación del cargo de cónsul honorario del Perú en la ciudad de Rosario. (Página 1153.)
- IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aceptación de condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Página 1153.)
- V.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la devolución del proyecto de ley de aumentos de jubilaciones, retiros y pensiones. (Página 1160.)
- VI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica el régimen de sanciones por infracciones laborales. (Página 1160.)
- VII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aumentan las jubilaciones, retiros y pensiones. (Página 1160.)
- VIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aumentan las jubilaciones, retiros y pensiones en el ámbito militar. (Página 1163.)
- IX.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 1163.)
- X.—Comunicaciones oficiales. (Página 1165.)
- XI.—Dictámenes de comisiones. (Página 1166.)
- XII.—Peticiones particulares. (Página 1166.)
- XIII.—Proyecto de ley del señor senador Beni por el que se rebajan las tarifas y pasajes aéreos al Sur argentino. (Página 1166.)
- XIV.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Cornejo Linares y Caro sobre construcción de escuelas en Salta. (Página 1167.)
- XV.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Cornejo Linares y Caro sobre estudios de la alta cuenca del río Bermejo. (Página 1168.)
- XVI.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Romero y Peroni sobre construcción de escuelas en Corrientes. (Página 1169.)

- XVII.—Proyecto de resolución del señor senador Perette por el que se rinde homenaje al periodista desaparecido don Alberto Martín Sosa. (Página 1169.)
- XVIII.—Proyecto de comunicación del señor senador Allende y otros señores senadores por el que se transfiere el Instituto Angel T. de Alvear a la Universidad Nacional de Luján. (Página 1170.)
- XIX.—Proyecto de ley del señor senador Lorenzo (J. L.) sobre amnistía al personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. (Página 1171.)
- XX.—Proyecto de declaración del señor senador Lorenzo (J. L.) sobre normalización de la Asociación del Fútbol Argentino. (Página 1172.)
- XXI.—Proyecto de ley de los señores senadores Solari Yrigoyen y Nápoli sobre régimen previsional para penados. (Página 1173.)
- XXII.—Proyecto de comunicación del señor senador Jáuregui y otros señores senadores sobre ayuda al pueblo de México. (Página 1173.)
- XXIII.—Proyecto de ley del señor senador Jáuregui y otros señores senadores sobre condonación de deudas previsionales. (Página 1174.)
- XXIV.—Proyecto de comunicación del señor senador Belenguer relacionado con la pavimentación de la ruta nacional 152. (Página 1174.)
- XXV.—Proyecto de resolución del señor senador Zarriello por el que se reiteran pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre barrios de emergencia. (Página 1175.)
- XXVI.—Proyecto de resolución del señor senador Perette y otros señores senadores por el que se expresa la solidaridad del Honorable Senado de la Nación con el pueblo de México. (Página 1175.)
- XXVII.—Proyecto de resolución del señor senador Perette y otros señores senadores sobre prescindencia electoral de los poderes públicos. (Página 1175.)
- XXVIII.—Proyecto de resolución del señor senador Perette y otros señores senadores sobre creación de una comisión especial de control de la prescindencia electoral de los poderes públicos. (Página 1176.)
- XXIX.—Proyecto de resolución del señor senador Zarriello y otros señores senadores sobre inscripción de la representación parlamentaria argentina en

el IV Congreso Interamericano de Vienda. (Página 1176.)

XXX.—Proyecto de ley del señor senador Angeloz por el que se otorga un subsidio a la Municipalidad de La Calera, Córdoba. (Página 1176.)

XXXI.—Proyecto de ley del señor senador Salas Correa por el que se crea el cargo de agregado laboral en las embajadas argentinas. (Página 1177.)

2.—Licencia al señor senador Esperanza. A moción del señor senador Martiarena se concede con goce de dieta. (Página 1177.)

3.—Discurso del señor senador de la República de Chile don Tomás Pablo Elorza. (Página 1178.)

4.—A moción del señor senador Martiarena se resuelve considerar sobre tablas y se aprueba el mensaje del Poder Ejecutivo a que se refiere el punto V de los asuntos entrados. (Página 1183.)

5.—A indicación del señor senador Martiarena se resuelve fijar un plan de labor. (Página 1183.)

6.—A moción del señor senador Perette se resuelve considerar sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución a que se refiere el punto XVII de los asuntos entrados. (Página 1184.)

7.—A moción del señor senador Elías se resuelve considerar sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley a que se refiere el punto XIV de los asuntos entrados. (Página 1185.)

8.—A moción del señor senador Elías se resuelve considerar sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación a que se refiere el punto XV de los asuntos entrados. (Página 1187.)

9.—A moción del señor senador Zarriello se resuelve considerar sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución a que se refiere el punto XXV de los asuntos entrados. (Página 1189.)

10.—A moción del señor senador León se resuelve considerar sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución a que se refiere el punto XXVI de los asuntos entrados. (Página 1189.)

11.—Manifestaciones sobre los proyectos de resolución sobre prescindencia electoral a que se refieren los puntos XXVII y XXVIII de los asuntos entrados. (Página 1190.)

12.—Consideración del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de comunicación sobre finalización del edificio para oficinas de Correos y Teléfonos en Pigüé, Buenos Aires. Se aprueba. (Página 1194.)

13.—Consideración del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de declaración sobre dotación de equipos para la limpieza de hielo y nieve en aeropuertos. Se aprueba. (Página 1196.)

14.—Consideración del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de comunicación sobre construcción del edificio de Correos en Corzuela, Chaco. Se aprueba. (Página 1199.)

15.—Consideración del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de declaración sobre escala de vuelos en Puerto San Julián, Santa Cruz. Se aprueba. (Página 1200.)

16.—Consideración del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de declaración sobre prestación de un servicio de transporte marítimo permanente entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se aprueba. (Página 1203.)

17.—Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en los proyectos de ley de servicio militar para estudiantes secundarios y universitarios. Se aprueba con modificaciones. (Página 1205.)

18.—Consideración del dictamen de la Comisión de Economía en el proyecto de ley sobre radicación de capitales extranjeros. Se aprueba. (Página 1211.)

19.—A indicación del señor senador Perette se fija preferencia para tratar el proyecto sobre paralización de juicios cuando el acreedor se encuentra sometido a proceso penal. (Página 1247.)

20.—A moción del señor senador Martiarena se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el día siguiente a las 9 y 30. (Página 1247.)

21.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado. (Página 1248.)

II.—Inserción. (Página 1249.)

—En Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de agosto de 1973, a la hora 11 y 15, dice el

Sr. Presidente (Allende).—Con la presencia de cuarenta y dos señores senadores en el recinto, que forman quórum reglamentario, queda abierta la vigésima sexta sesión ordinaria del presente período de sesiones.

Sr. Perette.—Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende).—Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette.—Señor presidente: hago moción de que se pase a cuarto intermedio hasta las 16 horas del día de hoy.

Sr. Martiarena.—Estamos de acuerdo, señor presidente.

Sr. Presidente (Allende).—Se va a votar la moción del señor senador Perette, de pasar a cuarto intermedio hasta las 16 horas.

—Se vota y resulta afirmativa.

manera que luego pueda continuar sus estudios, siempre que no se haya graduado a la edad de 26 años, y culminarlos cuanto antes.

Las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos, garantías y obligaciones constitucionales establecen, en cada caso, las excepciones compatibles con la regla general. Estimo que la doctrina constitucional ha admitido en muchas oportunidades esa reglamentación. Y esta que estamos considerando no es más que una reglamentación al principio de la igualdad consagrada por la Constitución.

No son iguales las circunstancias de quien ha dedicado muchos años de su juventud para prepararse y capacitarse debidamente en una carrera universitaria que las de otro ciudadano. De modo que este tratamiento especial está dentro de la interpretación que la Constitución permite se haga, en cada caso, del principio de igualdad.

Por consiguiente, ninguna de las dos objeciones es válida para cuestionar un proyecto que en este momento va a posibilitar que los profesionales se incorporen cuanto antes a la vida civil, en una hora en que el viejo espíritu mercantilista, es decir, el espíritu comercialista, que reinaba en la universidad, deja paso a una nueva concepción de servicio, porque nuestros universitarios, al egresar como profesionales, saben que estarán al servicio del pueblo, ya sea en el área de la salud, de la justicia o del progreso técnico o científico.

Estos jóvenes profesionales harán de sus actividades, más que un medio de vida o de enriquecerse, un instrumento con el que construirán la patria del futuro mediante su aporte personal. Y en ese sentido, facilitarles su más pronta e inmediata incorporación al servicio de su pueblo implica también contribuir a la liberación de la patria.

Sr. Presidente (Allende). — Si ningún senador hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Allende). — En consideración en particular.

—Sin observación se vota y aprueba el artículo 1º.

—Se lee el artículo 2º.

Sr. Zarriello. — Pido la palabra.

Para que este artículo tenga mayor claridad propongo que entre la palabra «universitarios» y la expresión «al 31 de diciembre» se incorpore el siguiente agregado: «durante el tiempo de prórroga y hasta el...». De manera que, consecuentemente, el inciso 9 de este artículo 2º quedaría redactado de la siguiente forma: «A los ciudadanos comprendidos en el artículo 17 que hubieran finalizado los estudios universitarios durante el tiempo de prórroga y hasta el

31 de diciembre del año en que cumplan 26 años de edad y obtuvieren título profesional».

Sr. Presidente (Allende). — ¿La comisión acepta, señor miembro informante?

Sr. Paz. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Allende). — Se va a votar el artículo 2º con la modificación propuesta por el señor senador Zarriello y aceptada por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—El artículo 3º es de forma.

Sr. Presidente (Allende). — Queda aprobado (1). Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

18

RADICACION DE CAPITALES EXTRANJEROS

Sr. Presidente (Allende). — Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Economía sobre inversiones extranjeras. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Arancibia Laborda). — (Leyendo):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Economía ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre radicación de capitales extranjeros y la comunicación recibida de la Honorable Cámara de Diputados, con motivo de la revisión de su sanción en ese proyecto de ley; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación con las siguientes modificaciones:

Artículo 6º — Apartado c), inciso 3; se suprime el último párrafo, cuyo texto se agrega como parte final del apartado c), a continuación del inciso 8.

Artículo 7º — Substituir la redacción del primer párrafo por la siguiente: «Para las actividades no enumeradas en el artículo 6º, inciso c), y cuando se trate de propuestas de radicaciones en empresas del tipo indicado en el artículo 2º, incisos a) y b), la autoridad de aplicación dará preferencia a aquellas solicitudes en las cuales los inversores se obliguen a: ...».

Artículo 14. — Se suprime el último párrafo.

Artículo 15. — Se suprime la frase: «...o cuya reinversión no se autorice conforme lo establecido en el artículo 14...».

Artículo 17. — Se agrega al final del primer párrafo: «...domiciliadas en el país.»; se suprime en el segundo párrafo lo siguiente:

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

te: «...no podrá ser en ningún caso superior al monto del capital repatriable más las reservas originadas en utilidades nacionalizadas y...».

Artículo 25. — Inciso a); se suprime la expresión «...bajo ningún concepto;» y se agrega en su lugar: «...excepto cuando se trate de créditos provenientes de organismos financieros internacionales de los cuales la República Argentina sea miembro integrante, y la operación esté encuadrada dentro de las prioridades sectoriales o regionales que determine el Poder Ejecutivo».

Artículo 26. — Se reemplaza su texto por el siguiente:

«Para los contratos de crédito externo que obliguen como deudores a personas físicas o jurídicas de derecho público o privado domiciliadas en el país, con acreedores domiciliados en el exterior, la tasa de interés efectiva anual no podrá exceder en más de 2 puntos la de los valores de primera clase vigentes en el mercado financiero del país de origen de la moneda en que se haya registrado la operación. En ningún caso estas tasas podrán ser superiores a las autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para los préstamos de que se trata en el artículo 24. A los efectos de la aplicación del presente artículo se entiende por interés efectivo el monto total que deba pagar el deudor para la utilización del crédito, incluyendo gastos, primas y condiciones de todo orden.

»No se comprenden en este artículo las relaciones entre filiales o sucursales y sus casas matrices o entre aquéllas, como tampoco cuando exista relación orgánica de dependencia entre la empresa local y la del exterior, en cuyo caso las contribuciones financieras, tecnológicas o de otra índole entre las mismas, cualquiera sea su calificación jurídica, se regirán por las reglas que regulan los aportes y las utilidades, según fuere el caso.»

Artículo 28. — Se agrega al final de su texto: «..., con intervención del Banco Central de la República Argentina.»

Artículo 31. — Se substituye después de la palabra «local», los términos: «de restitución de», por los de: «receptora de la».

De acuerdo con el artículo 91 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 30 de agosto de 1973.

José Antonio Allende. — Leopoldo Bravo. — Juan Carlos Cornejo Linares.

En disidencia:

Juan Carlos Pugliese.

Sanciones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(2 de agosto de 1973)

(9 de agosto de 1973)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I. AMBITO

Artículo 1º — La presente ley regirá en todo lo concerniente a:

a) Las radicaciones directas de capital extranjero en:

1. Divisas que se transfieran para su inversión en los sectores que determine el Poder Ejecutivo.
2. Bienes nuevos de capital y sus repuestos en la proporción indispensable que apruebe la autoridad de aplicación y cuya enajenación a cualquier título quedará prohibida en el contrato de radicación por el término que se establezca conforme a los bienes de que se trate.
3. Créditos externos en divisas que se capitalicen, siempre que el destino a que hayan sido aplicados esos créditos justifique, a criterio de la autoridad de aplicación, la autorización de su radicación en los términos de esta ley y los créditos externos en moneda nacional que cumplan iguales requisitos.
4. Utilidades provenientes de inversiones extranjeras, en condiciones de ser remesadas al exterior.
5. Títulos de la deuda externa nacional, cuando así lo apruebe la autoridad de aplicación, previo informe del Banco Central de la República Argentina teniendo en cuenta las condiciones de la balanza de pagos y el análisis del caso en particular;

b) Los créditos que obliguen como deudores a personas físicas o jurídicas de derecho público o privado domiciliadas en el país, con acreedores domiciliados en el exterior, de los que surjan, o puedan surgir derechos u obligaciones a transferir valores al exterior en concepto de amortización de capital o de pago de intereses;

c) Los contratos o convenios, de cualquier naturaleza, entre personas físicas o jurídicas de derecho público o privado domiciliadas en el país, y acreedores domiciliados en el exterior, en virtud de

los cuales surjan o puedan surgir derechos u obligaciones a transferir valores al exterior. Se exceptúan los contratos de uso de tecnología, de transporte y de seguros.

II. DEFINICIONES

Art. 2º — A los efectos de las regulaciones contenidas en la presente ley, las empresas locales quedan clasificadas de la siguiente manera:

- a) Empresas de capital extranjero. Se entiende por tales aquellas cuyo capital nacional sea inferior al cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital con poder de decisión;
- b) Empresas con participación de capital nacional y extranjero. Se entiende por tales aquellas cuyo capital nacional, privado o estatal, sea del cincuenta y uno por ciento (51 %) al ochenta por ciento (80 %) del capital de la empresa, posean poder jurídico de decisión y respecto de las cuales se acredite que la efectiva dirección técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa corresponde a los inversores nacionales;
- c) Empresas de capital nacional. Se entiende por tales aquellas en que los inversores nacionales posean una participación superior al ochenta por ciento (80 %) del capital de la empresa y poder jurídico de decisión y respecto de las cuales se acredite que la efectiva dirección técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa corresponde a los inversores nacionales.

Art. 3º — Se entiende por:

- a) Inversor extranjero: toda persona física o jurídica domiciliada fuera del territorio nacional, titular de un aporte de capital a radicar o ya radicado en empresas de las clases definidas en el artículo 2º;
- b) Inversor nacional: toda persona física domiciliada en el país o toda persona jurídica constituida de acuerdo con las leyes del país y domiciliada en éste, cuyos capitales estén en manos de personas físicas domiciliadas en el país que no representen directa o indirectamente a personas físicas o jurídicas extranjeras, y el Estado nacional o provincial o municipal y sus dependencias, organismos de cualquier grado de descentralización y empresas estatales;
- c) Domicilio: es el definido por el artículo 89 del Código Civil.

III. DE LAS RADICACIONES

Condiciones

Art. 4º — Los inversores extranjeros que deseen radicar capital extranjero en el país conforme a lo establecido en el artículo 1º, inciso a), deberán solicitar previamente autorización a la autoridad de aplicación, la que efectuará la evaluación y negociación correspondiente. Las radicaciones se instrumentarán por medio de un contrato de radicación entre dicha autoridad y los inversores extranjeros, el que deberá ser sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional, cuando dé lugar a la constitución de una empresa del tipo referido en el artículo 2º, inciso b), o del Honorable Congreso de la Nación cuando origine la constitución de una empresa del tipo establecido en el inciso a) del mismo artículo.

Art. 5º — Los contratos de radicación deberán atender substancialmente el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Que la radicación se efectúe en las actividades y zonas geográficas determinadas prioritariamente por el Poder Ejecutivo;
- b) Que contribuya a un mejor empleo de los recursos humanos y naturales del país;
- c) Que tienda a mejorar las condiciones de vida de la población;
- d) Que adopte los recaudos necesarios a fin impedir o limitar la contaminación ambiental;
- e) Que los bienes o servicios a producir posibiliten una substitución de importaciones o sean objeto de exportaciones a través de un compromiso expreso, debiendo dejar un beneficio neto para el país en cuanto al balance de divisas de la radicación, computándose para su cálculo de probables egresos por repatriación de capital, utilidades, amortizaciones, intereses, regalías, importaciones —incluso las indirectas a través de los insumos— y otros egresos;
- f) Que incorpore la tecnología necesaria para los objetivos socioeconómicos del país contemplando el desarrollo local de investigaciones y estudios de tecnología aplicada en el área que corresponda y la generación de tecnología nacional;
- g) Que emplee personal directivo, científico, técnico y administrativo de nacionalidad argentina, en la proporción que en cada caso indique la autoridad de aplicación;
- h) Que no signifique el desplazamiento actual o futuro del mercado de empresas de capital nacional;
- i) Que no requiera una captación de ahorro interno superior a los límites que se esta-

blezcan en virtud de esta ley, y que garantice una adecuada estructura financiera para cumplir con la evolución de la actividad a que se destine.

Prohibiciones

Art. 6º — No serán autorizadas nuevas radicaciones que:

- a) Estén sujetas a limitaciones de sus posibilidades de exportar o condicionen las exportaciones a acuerdos o convenios limitativos de cualquier naturaleza que a juicio de la autoridad que deba aprobar la radicación no resulten aceptables;
- b) Sustraigan los posibles conflictos o controversias a la jurisdicción y competencia de los tribunales argentinos o permitan la subrogación por Estados o personas jurídicas internacionales de las acciones y derechos de los inversores extranjeros;
- c) Se destinen a los sectores de:

1. Actividades relacionadas con la defensa y seguridad nacional.
2. Servicios públicos, entendiéndose por tales la prestación de servicios sanitarios, energía, gas, transporte, telecomunicaciones y servicios postales.
3. Seguros, banca comercial —excepto las sucursales de bancos extranjeros cuando exista un régimen de reciprocidad y convenga a los intereses nacionales y bancos de inversión— y actividades financieras. No se considerarán nuevas radicaciones las incluidas en el inciso c) del artículo 2º.
4. Publicidad, radioemisoras y estaciones de televisión, diarios, revistas y editoriales y otros medios de comunicación masiva.
5. Servicios de comercialización interna de productos de cualquier índole, con exclusión de los de su propia elaboración.
6. Actividades que por ley estén reservadas a empresas estatales o a empresas de capital nacional, sin perjuicio de las normas que fijen para la subcontratación con empresas privadas.
7. Actividades agrícola-ganaderas y forestales, salvo las que incorporen tecnología nueva de especial interés para la economía nacional, a juicio de la autoridad de aplicación.
8. Pesca, excepto cuando posibilite el ingreso de la producción a mercados internacionales cerrados.

Toda incorporación de nuevos sectores a la lista precedente deberá disponerse por ley;

- d) Que tengan por objeto la adquisición de acciones, cuotas, participaciones sociales de cualquier tipo y fondos de comercio destinados a la producción o comercialización de bienes, existentes en el país y pertenecientes a empresas de capital nacional, salvo que la adquisición de activos físicos o fondos de comercio se efectúe en el proceso de liquidación por quiebra de una empresa nacional, y en condiciones que, de acuerdo con la legislación específica, aseguren igual posibilidad de concurrencia a la adquisición a inversores nacionales, respetando las prohibiciones de los incisos a), b) y c) de este artículo.

Art. 7º — Para las actividades no enumeradas en el artículo 6º, inciso c), la autoridad de aplicación dará preferencia a las radicaciones que se soliciten para ser efectuadas en empresas del tipo indicado en el artículo 2º, incisos a) y b), si el solicitante se obliga a:

- a) Un programa de transformación de la empresa en empresa de capital nacional en un término de diez (10) años, debiendo haberse integrado por lo menos el veinte por ciento (20 %) dentro de los primeros cinco (5) años y el resto en proporciones no menores al dieciséis por ciento (16 %) anual;
- b) Garantizar la exportación progresiva de su producción en el volumen y plazos que deberán determinarse en el contrato de radicación.

Art. 8º — Cuando una radicación extranjera sea autorizada para una actividad que suponga agotamiento de las fuentes de recursos, la autorización preverá expresamente que no se permitirán amortizaciones por agotamiento fuera de las establecidas con carácter general por las leyes tributarias.

Art. 9º — La radicación del capital extranjero deberá estar representada en todos los casos por acciones, cuotas o participaciones de capital nominativas, y no transferibles sin el requisito de la inscripción en los libros de la sociedad, sin perjuicio de la previa autorización de la autoridad de aplicación. No podrá establecerse el voto múltiple para las participaciones de capital extranjero.

Prioridades

Art. 10. — La autoridad de aplicación otorgará prioridad a las radicaciones que, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5º, contemplen alguno de estos aspectos:

- a) Empleen mano de obra nacional desocupada y contribuyan a su instrucción;

- b) Apliquen tecnología creada o a desarrollar en el país;
- c) Utilicen materias primas, productos intermedios y bienes de capital de producción nacional;
- d) Contribuyan a la descentralización geográfica de las actividades económicas;
- e) Comprometan el depósito de las utilidades indicadas en el artículo 15, en el Banco Nacional de Desarrollo o en instituciones bancarias oficiales nacionales o provinciales con finalidades similares;
- f) Se obliguen a una reinversión de utilidades. En los contratos de radicación se determinarán expresamente las causales de prioridad consideradas, estableciéndose las obligaciones del inversor al respecto.

Repatriación de capital

Art. 11. — Se entiende por capital repatriable el formado por el monto de la inversión extranjera inicial autorizada y efectivamente radicada en el país, registrada en moneda de origen o similar, más las reinversiones autorizadas conforme a esta ley, menos el capital repatriado y las pérdidas netas, computadas en moneda de origen o similar, al tipo de cambio vigente en el momento de su determinación.

Art. 12. — La repatriación se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato de radicación o sus modificaciones, el cual:

- a) Garantizará la continuidad de funcionamiento de la empresa y la prestación del servicio en las condiciones estipuladas;
- b) Determinará la cuota anual de repatriación cuidando que la misma sea compatible con la continuidad indicada en el inciso a), no pudiendo exceder del veinte por ciento (20 %) del capital repatriable, y
- c) Establecerá un plazo inicial en el que no se realizarán repatriaciones, que no podrá ser inferior a cinco (5) años a partir de la aprobación del contrato de radicación.

Cada cuota anual de repatriación se determinará por montos fehacientemente acreditados y previa autorización de la autoridad de aplicación, en la moneda en que estuviere registrado el capital repatriable o similar, al tipo de cambio vigente en el momento de la transferencia.

Transferencia de utilidades

Art. 13. — Los inversores extranjeros podrán remesar sus utilidades al exterior en la proporción que se fije en el convenio de radicación o sus modificaciones. El monto de esa transferencia no podrá ser mayor a la tasa del doce, cincuenta por ciento (12,50 %), o la que exceda en cuatro puntos a la del interés que se pague,

en bancos de primera línea, para la moneda en que esté registrado el capital repatriable, por depósitos a plazo fijo de ciento ochenta (180) días como máximo, considerándose para determinar el tope la tasa superior resultante de ambos supuestos. La transferencia de utilidades no podrá efectuarse con fondos provenientes de créditos externos o internos y sólo se hará con recursos líquidos propios, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación. Tampoco podrá efectuarse la transferencia si existen deudas exigibles de carácter fiscal o previsional.

Reinversión de utilidades

Art. 14. — La autoridad de aplicación podrá autorizar la reinversión de las utilidades con derecho a transferencia, con la misma empresa, la que no podrá realizarse en condiciones distintas a las que estipule el contrato de radicación o sus modificaciones, y su aprobación se instrumentará por resolución de la autoridad de aplicación. La reinversión de utilidades con derecho a transferencia en otras empresas deberá ajustarse a las disposiciones de la presente ley y sus normas complementarias.

En todos los casos la reinversión se efectuará por montos fehacientemente acreditados en la moneda en que estuviere registrado el capital repatriable o similar, al tipo de cambio vigente en la fecha de la autorización. La autoridad de aplicación podrá restringir el monto reinvertible a determinado porcentaje de las utilidades.

Una vez autorizada, la reinversión será considerada como una nueva radicación y dará derecho a repatriar capital y transferir utilidades conforme a lo establecido por esta ley.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, los inversores podrán reinvertir en la misma empresa, con autorización previa y con la sola condición de su registro, sus utilidades anuales hasta el límite del cinco por ciento (5 %) del monto de la inversión autorizada.

Utilidades definitivamente radicadas en el país

Art. 15. — Las utilidades que anualmente excedan los porcentaje que determina el artículo 13 o cuya transferencia no se hubiere solicitado de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, o cuya reinversión no se autorice conforme lo establecido en el artículo 14, quedarán definitivamente radicadas en el país y no podrán ser transferidas al exterior bajo ningún concepto, pero podrán ser invertidas o reinvertidas como capital local sin derecho a repatriación ni a transferencia de utilidades, previa conformidad de la autoridad de aplicación, no pudiendo destinarse a los sectores económicos enumerados en el inciso c) del artículo 6º de esta ley.

Restricciones

Art. 16. — En situación crítica de la balanza de pagos, las repatriaciones de capital y trans-

ferencias de utilidades podrán ser diferidas mientras aquella situación subsista, sin que ello afecte los derechos a tales remesas, en todos los casos a juicio del Banco Central de la República Argentina.

Art. 17. — La autoridad de aplicación fijará en cada contrato de radicación un límite máximo al endeudamiento del inversor extranjero o de las empresas extranjeras, con personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado.

Dicho endeudamiento no podrá ser en ningún caso superior al monto del capital repatriable más las reservas originadas en utilidades nacionalizadas y se limitará exclusivamente al crédito interno de corto plazo en las condiciones que, para cada sector, se determine, salvo los regímenes financieros de promoción de carácter especial que el Banco Central de la República Argentina declare también aplicables a las empresas comprendidas en esta ley.

Art. 18. — Los inversores extranjeros que participen en el capital de empresas que a partir de la fecha de la vigencia de esta ley obtengan beneficios por el acogimiento a regímenes promocionales, perderán el derecho previsto en los artículos 11, 12 y 13, mientras duren los beneficios u obligaciones derivados de dicho acogimiento.

Art. 19. — En ningún caso podrá otorgarse a inversores extranjeros tratamiento más favorable que el que se otorgue a inversores nacionales.

Radikaciones anteriores

Art. 20. — Las radikaciones de capital extranjero, anteriores a la sanción de esta ley, que se hallen directa o indirectamente invertidas en los sectores del artículo 6º, inciso c), subincisos 1 y 4, podrán ser intervenidas por la autoridad de aplicación, la que determinará, en su caso, seguidamente la procedencia y conveniencia de su nacionalización o expropiación por el Congreso de la Nación.

Las radikaciones de capital extranjero que determina el inciso a) del artículo 1º, ingresadas al país en virtud de cualquier norma vigente con anterioridad a esta ley, deberán inscribirse en el Registro de Inversiones Extranjeras que establece el artículo 32, en las condiciones que fije la reglamentación.

Las remesas de utilidades de las empresas comprendidas en el artículo 2º, incisos a) y b), estarán gravadas por un impuesto especial a la transferencia conforme a la siguiente escala sobre el capital repatriable con derecho a transferencia de utilidades:

Hasta el	6 %	-	20 %
más del	6 al	9 %	- 22 %
más del	9 al	12 %	- 25 %
más del	12 al	15 %	- 30 %
más del	15 %	-	40 %

Este impuesto será recaudado por la Dirección General Impositiva de acuerdo con lo dispuesto en la ley 11.683, texto ordenado en 1968 y sus modificaciones.

Quedan excluidos del impuesto precedente los inversores extranjeros que opten por sujetarse a las normas de esta ley, y soliciten su registro como tales, quedando en consecuencia sometidos a su régimen. En este supuesto, la autoridad de aplicación evaluará la solicitud conforme a los requisitos y al procedimiento establecidos por la presente ley, proponiendo al Poder Ejecutivo la aprobación de las nuevas condiciones y del contrato de radicación pertinente.

Art. 21. — A los efectos de las radikaciones que determina el artículo 20 se computará como capital repatriable con derecho a transferencia de utilidades el que resulte propiedad de inversores extranjeros, efectivamente radicado en el país y fehacientemente comprobado por la autoridad de aplicación.

Art. 22. — Los convenios de radikación que se celebren podrán contemplar, en los casos que la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo así lo determine, un programa de transformación de las empresas en empresas de capital nacional o con participación de capital nacional y extranjero, según se establezca, que garantice un aumento progresivo de la inversión nacional.

En esos casos, el Poder Ejecutivo tendrá en cuenta las características del sector, volumen de las empresas, situación de la balanza de pagos y posibilidades de inversión nacional.

Art. 23. — Las radikaciones extranjeras que no hubieren cumplimentado en término la obligación de inscribirse en el Registro de Inversiones Extranjeras no podrán repatriar capital ni remesar utilidades al exterior, quedando asimiladas a los efectos del uso del crédito a las inversiones nacionales.

IV. CREDITOS EXTERNOS Y CONTRATOS O CONVENIOS DE PARTES

Art. 24. — Los créditos externos previstos en el artículo 1º, inciso b), sin principio de ejecución a la fecha de publicación de la reglamentación de esta ley en el Boletín Oficial, requieren autorización previa del Banco Central de la República Argentina, conforme lo establezca la reglamentación. La autorización se otorgará previo análisis de las características generales de la operación propuesta, según las condiciones de los mercados financieros internacionales, y de acuerdo con el principio de la realidad económica. La autorización deberá quedar registrada ante el Banco Central de la República Argentina, quien podrá fijar límites globales o sectoriales de endeudamiento externo por períodos determinados.

Se excluyen de los requisitos de este artículo a los créditos externos por bienes de capital pagaderos a plazo y los destinados a cubrir importaciones.

Créditos a empresas extranjeras

Art. 25. — Los créditos externos que obliguen a empresas extranjeras quedan sujetos a las siguientes condiciones:

- a) No podrá otorgarse a dichos créditos aval bancario bajo ningún concepto;
- b) El monto de las transferencias al exterior por penalidades en que incurra la empresa extranjera, por su culpa o dolo o el de sus representantes, mandatarios o directores, se descontará directamente del monto del capital repatriable, sin perjuicio de las acciones que correspondan;
- c) Los créditos sin plazo o sin monto fijo no podrán superar el límite máximo de endeudamiento ni apartarse de las condiciones que para cada operación establezca el Banco Central de la República Argentina.

Se excluyen de los requisitos de este artículo a los créditos externos por bienes de capital pagaderos a plazo y los destinados a cubrir importaciones.

Créditos y otros aportes entre casa matriz y/o filiales o subsidiarias

Art. 26. — Los contratos de crédito externo convenidos entre casa matriz y filiales o subsidiarias de una misma empresa extranjera, o entre éstas, y una tercera, económicamente vinculada a las mismas, así como otras prestaciones originadas en contribuciones tecnológicas incluso por asesoramiento técnico, se regirán por los principios del aporte y utilidades.

Créditos anteriores

Art. 27. — Los créditos externos con principio de ejecución a la fecha de la publicación de la reglamentación de esta ley en el Boletín Oficial deberán adecuar sus prórrogas o modificaciones a lo establecido en los artículos 24 a 26. Los créditos sin monto o sin plazo fijo deberán adecuarse a esas normas dentro del término de un (1) año a partir de esa publicación. Vencido dicho plazo, sin el cumplimiento de estos requisitos no podrán efectuarse remesas al exterior por estos conceptos.

Se excluyen de los requisitos de este artículo a los créditos externos por bienes de capital pagaderos a plazo y los destinados a cubrir importaciones.

Contratos o convenios

Art. 28. — Los contratos o convenios a que se refiere el inciso c) del artículo 1º, celebrados a partir de la fecha de vigencia de esta ley, sólo autorizarán remesas al exterior una vez aprobados por la autoridad de aplicación.

V. DISPOSICIONES FINALES

Art. 29. — Se declaran nulos todos los pactos o acuerdos entre socios o accionistas y sindicatos de acciones tendientes a violar las normas de esta ley y especialmente por los que se otorguen al capital extranjero derechos ocultos de decisión o veto distintos de los que aparezcan ostensibles en los actos que se exhiban o denuncien a la autoridad de aplicación.

Art. 30. — Las transgresiones a las disposiciones de la presente ley determinarán la suspensión transitoria o definitiva de los derechos establecidos en la misma, sin perjuicio de las responsabilidades penales, cambiarias, tributarias y/o aduaneras, tanto para la empresa como para sus mandatarios, cómplices o encubridores ocultos y partícipes.

Art. 31. — La responsabilidad emergente de las obligaciones contraídas en el contrato de radicación por una empresa local de restitución de inversión extranjera será asumida en forma conjunta y solidaria por el inversor extranjero.

Art. 32. — La autoridad de aplicación y control del cumplimiento de las radicaciones autorizadas será creada por decreto del Poder Ejecutivo nacional dentro del ámbito del Ministerio de Economía y de ella dependerá un registro de inversiones extranjeras. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a contar desde su vigencia.

Art. 33. — Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar las providencias necesarias para reconvertir a empresas de capital nacional en un plazo de tres (3) años a las que habiendo tenido este último carácter se transfirieron a inversores extranjeros mediante el procedimiento de desnacionalización a que se alude en el artículo 6º, inciso d), de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.

Art. 34. — Esta ley es de orden público.

Art. 35. — La presente ley rige en todo el territorio de la Nación y deroga las disposiciones de la llamada ley 19.151 y los decretos reglamentarios 2.400/72 y 7.473/72, así como toda otra norma que resulte incompatible con su vigencia. Todas las presentaciones en trámite realizadas con anterioridad a la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial deberán adecuarse a sus normas.

Art. 36. — Dentro de los sesenta (60) días de la fecha de aplicación de esta ley, el Poder Ejecutivo elevará al Honorable Congreso un proyecto de ley que regule el monto de las remesas por servicios tecnológicos, royalties, re-

galías y otros conceptos como comisiones, honorarios, que impliquen erogaciones en moneda extranjera correspondientes a empresas nacionales, mixtas o extranjeras.

Art. 37. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

SALVADOR F. BUSACCA.
Alberto Luis Rocamora.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1973.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que esta Honorable Cámara ha revisto, en reunión de la fecha, su sanción del día 2 del mes en curso sobre régimen para la radicación de capitales extranjeros, y ha tenido a bien substituir, en el artículo 31 de la misma, después de la palabra «local», los términos: «de restitución de», por los de: «receptora de la».

Dios guarde al señor presidente.

SALVADOR F. BUSACCA.
Alberto Luis Rocamora.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Américo Alberto García.

Sr. Presidente (García, A. A.). — En consideración en general. Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión, senador Allende.

Sr. Allende. — Señor presidente: el tener que informar sobre este proyecto de inversiones extranjeras tiene de por sí relevante importancia en cuanto a su contenido temático, a su significación, para la autodeterminación del país, para su soberanía, para la reconstrucción nacional y para su proceso de liberación.

En la particular circunstancia que vive la República, es propicia la oportunidad para que este alto cuerpo, el Senado de la Nación, brinde una vez más a la opinión pública nacional el testimonio de la jerarquía de sus instituciones cuando ellas están en vigencia auténtica, y muestra cómo, no obstante que todo tiempo pre-electoral hace subir el termómetro de la pasión política, más allá de las divergencias sectoriales, los argentinos sabemos unirnos cuando se trata de defender el país, sus causas nacionales, su sentido de autodeterminación, en una palabra, el calor de patria, por encima de la particularidad pasional y de la bandería política.

La coincidencia que hay alrededor de este proyecto estimula el espíritu argentino y es una especie de brisa fresca en un país que, poco a poco, y por la voluntad auténtica y legítima de su pueblo, va recuperando la confianza en sí mismo, la seguridad de que en un clima de con-

vivencia, de unidad nacional que no impone uniformidad ni pretende frenar la discrepancia, sino respetarla —como se ha dicho ayer por el líder máximo de su quehacer político—, puede converger en las tareas substantivas de defensa de sus intereses trascendentes.

Cuando trataba de optar por el estilo parlamentario con que debía hacer este informe, advertí que había distintas actitudes posibles de tomar: u optar por la alternativa de rendir tributo a un chauvinismo superficial, a una especie de misantropía económica, que en la exageración del vocablo y del calificativo puede dar la imagen equivocada de que los argentinos pretendemos encerrarnos en una autarquía económica absoluta que sería totalmente adversa al tiempo universalista y de la interferencia recíproca que se vive; o abandonar totalmente el plano emocional y envolverse en una demostración de erudición técnica, de acopio de datos y examen de antecedentes, que haga del informe una exposición erudita pero carente de toda la significación política que debe tener; o bien hacer lo que debe hacerse en un cuerpo eminentemente político como el Senado de la Nación: testimoniar el nuevo estilo parlamentario en el cual la falta de bullicio, la serenidad del juicio, el estudio serio, la búsqueda de coincidencias, todo aquello que merece la confianza en el país, deambula sin espectacularidad en las reuniones de comisiones. En ellas, en el largo diálogo recíproco, uno a veces no sabe qué admirar más: si la capacidad y la vocación de los señores legisladores, su información y seriedad, el aporte que hacen los distintos asesores que llegan a ella o, en definitiva, esta nueva vocación de intimidad y de calor argentino que se siente en toda la labor del Parlamento y que bulle realmente en la labor silenciosa, substantiva y fundamental para la reconstrucción nacional que se realiza en cada una de las comisiones.

El decir esto no es autoponderación, sino un toque de atención para el país y para los medios de comunicación e información que deben acostumbrarse a no buscar en el Parlamento la exhibición de un espectáculo, pues no somos escenario del espectáculo del país, sino la vertebración de su reconstrucción. Y prefiero el silencio de los medios de comunicación a que figuremos en ellos por la fácil vía del encuentro superficial o de la discrepancia sin contenido.

Yo amo la discrepancia, porque en ella se encuentra siempre el rayo de luz, de certeza, de seguridad y, a veces, de verdad que a uno le falta, y porque la verdad total no es nunca cierta en la conducción ni en el quehacer político, y mucho menos en los quehaceres concretos de la realización de un país, precisamente porque conducimos la realidad, y ésta no reconoce dogmatismos, que son propios del ámbito de los principios absolutos, sino que es contingente y, como la vida que se vive, cambia día a día.

Nosotros, que estamos aquí no para inventar sino para interpretar al país, venimos no a imponer sino a buscar, en la labor silenciosa, en la respuesta seria y substancial, la contestación con que legítimamente cada uno de los que aquí nos sentamos y cada uno de los sectores que componen este Honorable Senado siente que debe, honestamente, y dentro de los límites de su capacidad y de su información, dar al país.

Este proyecto es uno de los que responde a ese requerimiento, y en él felizmente coincidimos los sectores que aquí nos sentamos; coincide el gobierno, que es su autor principal, y yo diría que coincidirá todo el país cuando conozca su contenido, cuando sepa que ésta es una de las leyes fundamentales que aquí se debaten. Puedo adelantar el juicio de la excelencia de su estructura, de su buena redacción, de la coordinación y coherencia de su texto, de la falta de superficialidad y de la hondura de sus normas, y puede así advertirse su verdadero mérito.

De tal modo, lo primero que destaco —porque es lo que hay que mostrar a la opinión pública desde un cuerpo político— es que, a través de leyes como éstas, todos los sectores aquí presentes estamos en la defensa del patrimonio fundamental del país; estamos en la acentuación del signo de lo propio; estamos en la conciencia plena de que la coyuntura de la Argentina requiere aplacamiento de las pasiones y convergencia en lo auténticamente nacional.

Una ley de inversiones extranjeras no es simplemente un cartabón de confianza; no es simplemente un instrumento para decirle al inversor extranjero: «Usted va a poder hacer, en tal o cual condición, tal o cual negocio en el país». Toda inversión extranjera y todo interés extranjero están estrechamente ligados al enclavamiento del país dentro del contexto de la economía mundial, y a la conformación que dan los vínculos con el exterior.

Larga sería la historia que permitiría demostrar esta afirmación. Pero yo quiero señalar que en la experiencia argentina —para muestra basta un botón— la conformación y la distorsión de su estructura, que ha significado en más de una ocasión un cuello de botella para su desarrollo armónico, es la resultante de un modo de nuestro enclavamiento en la relación mundial, tanto en lo que hace al comercio exterior como a la inversión externa, prácticamente, cuando comenzábamos a desarrollar básicamente aspectos fundamentales de la economía y del comercio externo.

Nadie puede dudar, porque es un dato de comprobación empírica, y casi una motivación de espectáculo de turismo, que este país se centralizó no tanto por la vocación centralista del hombre porteño, que subestimó o anuló al hombre del interior, sino por el modo de relación con la economía mundial del siglo pasado, que hizo que la Argentina despertara su apetencia hacia el

comercio externo y que las primeras inversiones extranjeras que vinieron a este país apuntaran a que sus modos de comunicación interna tenían que servir a aquel modo de relación con el exterior, a que su red ferroviaria fuera no un enjambre que vinculara armónicamente al país sino una red que trajera todo su producto natural hacia el puerto de embarque, según la interrelación de las conveniencias entre el comprador del exterior y el inversor extranjero que venía hacia nosotros.

Yo no hago en esto un juicio de valor ni crítico generaciones, sino simplemente señalo, objetivamente, hechos, porque yo creo que la historia hay que usarla no tanto para enfrentarnos sino para entendernos. Entendemos los hechos de la historia no haciendo juicios de valor, sino advirtiendo determinados modos de acción que han ocasionado ciertas consecuencias, no siempre favorables al desarrollo armónico del país o a los intereses fundamentalmente argentinos. Más allá de las buenas o malas intenciones, más allá del sentido patriótico de todas las generaciones, y yo creo que todas lo tuvieron; más allá de la cosmovisión que se tuvo de nuestra realidad, en las distintas etapas gobernantes, inmersa dentro de un contexto internacional.

Cuando uno piensa en este problema de la inversión extranjera y en nuestra propia estructura mirada desde un desarrollo hacia afuera, uno ve con claridad la antinomia entre dos siglos: un siglo XIX que estuvo signado por la mentalidad liberal que hizo del planteo económico una especie de distribución internacional del trabajo entre países periféricos, que concurrían a la economía mundial con sus productos naturales, y países desarrollados, que lo hacían con su gran capacidad de compra y su posibilidad manufacturera y de elaboración. Eso determinó, nos guste o no nos guste —y es bueno recordarlo para no caer en iguales errores de dependencia—, la dependencia actual del país como proceso y como consecuencia, y originó un modo de enclavamiento de la realidad económica argentina en la relación externa, tanto en lo que es comercio exterior como en la búsqueda de recursos o inversión extranjera.

Pero el siglo XX es la antinomia del siglo anterior. La crisis del año 1930 trae para cada país —y el nuestro está dentro del mundo, no fuera de él— la necesidad de refugiarse un poco en sí mismo; determina a escala universal la incitación a la afirmación de las propias estructuras productivas, a la aplicación de defensas y barreras aduaneras que permitirían los incipientes desarrollos industriales, que coinciden como fenómeno con la aparición a nivel mundial del progreso tecnológico, de la economía de escala, de la realidad social organizada, de los factores de poder, no específicamente políticos, que inciden y actúan en la vida política de un país y que irrumpen en la Argentina casi coincidiendo con el comienzo de sus crisis institucionales.

Hace cuarenta años que la Argentina busca una respuesta para su estabilidad institucional y, precisamente, hace cuarenta años que vive enclavada dentro de la realidad mundial, en esta crisis que signa al siglo XX como opuesto al siglo XIX; crisis hecha de afirmación de lo nacional, que tiene que defenderse y afirmarse a sí mismo, porque, precisamente, no puede desligarse de lo internacional, y replantea totalmente el sentido de un nacionalismo que fue válido cuando tendía más que todo a la afirmación de los valores propios que están totalmente vertebrados en nuestra conciencia y en nuestro espíritu.

La Argentina es un país de mentalidad nacionalista, en el mejor sentido del término, porque lo nacional determina las voluntades y muestra la consistencia de las causas de unidad nacional, más allá de las discrepancias políticas. Pero advierto, también, que en el mundo actual el nacionalismo tiene otra misión y otro viso, que no es simplemente una expresión política, sino un desafío a la imaginación, sobre todo a la imaginación de la conducción política, para poder vigorizar lo institucional y lo propio, con verdadera originalidad y como auténtica síntesis de la vigorización de lo propio y del papel protagónico en lo internacional.

Quien no tenga vocación nacional y vocación internacional pierde la posibilidad de grandeza en el momento que se está viviendo. Por eso una ley como ésta, que recoge en su estructura, en su articulado, en los propósitos que la alientan, toda una experiencia que vivimos durante tantos años, unas veces válida y otras deficitaria, es una ley que tiende a eso que los argentinos buscamos: la síntesis entre la afirmación y el fortalecimiento de lo propio y la vocación internacional; la síntesis entre el protagonismo regional y el universal, que ha de volver a insuflar calor y arrojo incontenibles a todo el espíritu nacional.

La Argentina en esta ley —y puedo decirlo desde esta alta tribuna, el Senado de la Nación— se afirma a sí misma y le dice al mundo que no le teme; se afirma a sí misma porque se defiende de toda intromisión indebida, y le dice al mundo que no le teme porque no se evidencia en este proyecto un chauvinismo superficial ni una animadversión hacia lo externo, sino que sólo plantea con fuerza la recuperación de su poder de decisión política.

No hay duda de que todo planteo de inversión externa es, por excelencia, fundamentalmente, un planteo político, en el mejor sentido de la palabra, en el que lo económico tiene un valor instrumental. Toda inversión extranjera es un acto de decisión política, porque, esencialmente, es una actitud de soberanía, es decir, de afirmación.

En este problema de la inversión extranjera hay ciertas actitudes que creo perimidas: la actitud liberal de la aceptación, sin cortapisas, del

inversor extranjero es un poco la confesión de la propia debilidad, la alienación mental de ciertos sectores dirigentes —felizmente minoritarios y carentes de la adhesión popular— que más de una vez, por esta suerte de imponderables, ha dominado y ha conducido al país. No es posible admitir, a esta altura de los tiempos, que alguien pretenda enajenarnos haciendo renacer, bajo pretextos totalmente inaceptables, no defendibles, el liberalismo sin cortapisas para una política de inversión extranjera, so pretexto de una supuesta incapacidad de ahorro nacional, que no es tal, y de una supuesta incapacidad de nuestra estructura humana y tecnológica, que tampoco es cierta.

Muy a menudo oigo, en ciertos círculos argentinos, el empeño con que determinada mentalidad critica la discrepancia de nuestro sentido profundamente nacionalista frente al inversor extranjero, con la actitud de otro país de América que es la antítesis de este sentimiento nuestro. Muestran a aquella actitud como ejemplo de progreso y crecimiento y me pregunto: ¿para qué queremos crecer y progresar?, ¿para nuestra propia liberación o para usufructo del negocio del extranjero?

Porque si analizamos en profundidad los procesos discrepantes no se deja de advertir que no debe aspirarse al progreso cuantitativo de la economía a costa de distorsiones estructurales o a un costo social que tenemos la suerte de poder sostener que en nuestra Argentina el pueblo no lo admitiría jamás; con enajenación y alienación de su poder de decisión económica, con prioridades para el inversor extranjero que en nuestro país nunca podrían darse en condiciones de desigualdad.

Este proyecto, en uno de sus artículos, lo dice enfáticamente: al señalar que no podrá darse, en ningún caso, dentro de la ley ni de su reglamentación, prioridad al inversor extranjero que signifique desigualdad frente al inversor nacional, y que en caso de opción o de preferencia siempre debe privar lo nacional. La inversión extranjera es un medio instrumental y la causa nacional es el gran objetivo para todos aquellos que laboren con mentalidad y espíritu argentinos.

De modo tal me adelanto a las falsas críticas que este proyecto puede originar en el juicio público que expresan en el país ciertos sectores de opinión.

Por otra parte, es totalmente falso que el inversor extranjero pueda no venir porque el país no abra sus rendijas a los cánones de la dependencia y de la mentalidad opresora. Si hay algo pragmático en el mundo actual es el capital que no tiene patria; si hay alguien que tiene sentido pragmático es el inversor extranjero, a quien lo único que le interesa es la estabilidad, es decir, saber cuál es el régimen, pero sabe también que si abusa es porque lo dejan abusar, y si no lo dejan abusar viene lo mismo.

No hay duda de que es así, porque la corriente inversora extranjera no se está orientando actualmente con primacía hacia los países en etapas de desarrollo, ni siquiera a los países con un régimen político de mentalidad occidental, sino que se está dirigiendo cada vez más a los países ya desarrollados y a los del área socialista. No creo que los países socialistas se hayan convertido al capitalismo ni que la mentalidad capitalista se haya convertido al socialismo. Simplemente es el pragmatismo del negocio económico.

Por consiguiente, rechazo por falsa la afirmación de que una ley como ésta, que hace al decoro nacional y que recoge en su articulado toda la experiencia de las demasías y los abusos que se cometieron dentro de nuestro propio ámbito económico, va a detener al inversor extranjero.

En la realidad actual, también está perimida la mentalidad totalmente opuesta al liberalismo, la que pretende una autarquía económica total, porque la realidad económica del mundo muestra la interdependencia de las economías a escala mundial y porque si queremos lograr ciertas satisfacciones para nuestra realidad interna tenemos que comprender que, a la vez que defiende lo propio, el país tiene que entrar también dentro de la economía a escala, y que la nuestra, por mucho que se la vigorece, dadas las motivaciones y los métodos de la tecnología moderna, es insuficiente para alcanzar por sí sola un alto nivel de productividad que proporcione producción barata para los sectores de menores ingresos.

Aquí está lo que yo decía, como síntesis de una actitud política: que lo que hay que buscar en estas leyes es el juego armonioso de la defensa de lo propio y de la capacidad para una vocación regional y universal del país. La Argentina tiene, como ningún otro país latinoamericano, una extraordinaria infraestructura natural y, lo que es más importante, una extraordinaria infraestructura humana, que las hace óptimas para participar de un proceso económico que, partiendo de la realidad nacional, pretenda interferir dentro de la economía de escala regional y mundial.

Cuando afirmo esto, es evidente que podría presentar cientos de ejemplos. Recuerdo un libro de Servan-Schreiber titulado *El desafío americano*, en el que hace el análisis de la penetración del capital americano en el Mercado Común Europeo. Cuando se lee ese libro y otros antecedentes, se comprueba que esa penetración no reside tanto en la capacidad financiera; allí, como acá, la inversión extranjera es más un sajal que una realidad en cuanto a transferencia de fondos, porque descansa más en la transferencia del equipo humano. Cuando uno de esos países, que fue Francia, se levantó indignado, por obra de quien en ese momento lo dirigía con clarividencia, y quiso poner freno a eso, con

todo desparpajo, pero en buenos términos, las empresas asumieron una actitud que significaba decirles: quédense con las máquinas, quédense con las paredes, porque nosotros trasladamos al equipo humano a otros países de la propia comunidad europea; entonces Francia tuvo que rever las propias medidas restrictivas y buscar otros caminos de defensa de su sentido nacional.

Esto sirve para advertir que más allá de lo puramente financiero, más allá de lo puramente utilitario, de la transferencia tecnológica o de la incorporación de maquinarias o de capital, lo que vale y hace a la defensa substancial de un país en el plano de su desarrollo industrial o cultural es la capacidad humana.

En esta Argentina en que todos los días nos rasgamos las vestiduras porque exportamos cerebros y porque vemos cómo triunfan en países más desarrollados, hombres argentinos formados con el esfuerzo y el peculio de nuestro pueblo, que han ido al exterior a buscar horizontes, afirmo que hay, como en ningún otro país en Latinoamérica, la posibilidad de su desarrollo autodeterminado, no totalmente aislado, pero sí autodeterminado y suficientemente defendido, porque tiene una estructura humana substancial.

Yo supe leer en alguna publicación, que lamentablemente no tengo en este momento, que uno de los inversores extranjeros que vinieron aquí e implantaron una de las industrias principales que existen en Córdoba, en rueda de funcionarios, en su sede central fuera del país, afirmó que no conocía un obrero más imaginativo, dentro del complejo industrial de esta empresa multinacional en todo el mundo, que el obrero argentino; porque cuando no le respondía la máquina usaba la imaginación y resolvía sobre el tambor, por propia iniciativa y sin la búsqueda de la sumisión vertical a su jefe, problemas que parecían pequeños, pero que en la totalidad del complejo industrial permitían la no interrupción de la serie.

De modo tal que, es bueno también afirmarlo, una ley de inversión extranjera no es solamente un instrumento para ubicar al país dentro del comercio exterior o del enclavamiento en la economía mundial, sino que, fundamentalmente, tiene que proporcionar los principios para una política industrial propia. Esta ley no define la política industrial, en cuanto es un imponderable que tiene que ir desarrollándose según la concepción integral de la economía o de la estructura económica del país, pero sí fija esos principios de los cuales no puede apartarse el capital extranjero y que significan canales de orientación para una política industrial en la Argentina.

Pero, además, es satisfactorio señalar que esta ley forma parte de un paquete coherente de disposiciones. Nosotros hemos tratado: la ley de regionalización de los directorios bancarios; la de nacionalización de los depósitos bancarios —que permite la recuperación del manejo del crédito al servicio de una política económica—;

la carta orgánica del Banco Central; y la de la Corporación de Empresas Nacionales —que permite dinamizar y vertebrar una política industrial, agilitando al sector—. Con este conjunto de normas hemos dado los instrumentos para aplicar una política económica para la cual es absolutamente fundamental esta ley de inversiones extranjeras.

Al comenzar adelanté mi juicio de que esta es una ley excelentemente estructurada. No corresponde, en un informe en general, reeditar en detalle lo que conocen los señores legisladores y lo que por simple lectura de su texto puede conocer cualquier ciudadano interesado, dada su claridad y su coherencia. Sin embargo, quiero señalar ciertos aspectos del proyecto que corrigen determinados defectos.

Hay cierta propensión en el ámbito internacional, experimentada más de una vez en la Argentina, que me permite hacer una afirmación que puede ser injusta en algunos casos, pero que creo absolutamente cierta: el mundo hoy desarrollado, cuando se ha propuesto alentar la incorporación de valores a los procesos y a las etapas de desarrollo de los países subdesarrollados, lo ha hecho en forma tal y tan sutil, que con el modo de una supuesta ayuda estaba transfiriéndonos estructuras y maquinarias obsoletas que ya no servían, en razón del adelanto tecnológico de su propio país. Entonces, con la modalidad de una supuesta inversión, nos trasladaban todo un equipo de maquinarias que hacía que nuestro país comenzara su producción en un nivel técnico ya obsoleto en el país titular de la inversión. Es decir, nosotros costeábamos, en la proporción adecuada por cierto, el desarrollo de ellos y no ellos el nuestro.

Señalo esto porque es una de las grandes mentiras y de las mayores falacias del inversor extranjero: trasladar a los países de inversión toda una estructura de maquinaria y proceso productivo que, en su propio país, lo tirarían a la basura, y que más de una vez ha significado una estafa para el nuestro.

El proyecto habla de bienes nuevos de capital. Espero que en la aplicación de la ley esta calidad de «nuevo» se interprete no solo porque está recién hecho, sino porque como maquinaria y como infraestructura del proceso productivo signifique una novedad tecnológica y no un desecho científico ya no usado en el país que lo envía. ¡Espero que la conducción económica, de aquí en adelante, cualquiera sea el signo con que se haga, no vuelva a permitir una estafa al país, como las que tantas veces se ha sufrido! (*¡Muy bien!*)

Hay otras experiencias que se recogen en el proyecto.

Es sabido que el sayal del inversor extranjero, más de una vez, simplemente ha simulado un buen negocio. No grito tanto contra el extranjero; grito mucho más contra el nacional que actúa como si fuera extranjero. Porque la experiencia

de nuestra historia económica me revela que cuando sufrimos dependencia, no solamente hay un extranjero responsable, sino que hay un nacional o débil de voluntad o interesado de espíritu o carente de patriotismo, que le ha servido de vehículo y de entregador.

Por consiguiente, advierto que más de una vez aquí se han disfrazado como inversores extranjeros quienes trajeron apenas un pequeño aporte financiero, y no bien llegaron hicieron una transferencia de maquinarias y tecnología obsoletas y comenzaron a disfrutar del ahorro interno del país. Porque, precisamente, su aureola de técnica importada les creaba, a nivel de los que manejaban el crédito, un privilegio no establecido en la norma, pero sí determinante de la voluntad de los conductores del momento; ello provocó que esa empresa, con el rótulo de extranjera, en el fondo fuera nacional en todo, menos en los intereses fundamentales que la determinaban, en el centro de decisión —que estaba siempre fuera del país— y en la realidad de su conducción interna.

El proyecto recoge esta experiencia dolorosa y no permite captación de ahorro interno, sino en los límites que pueden estar prefijados en el contrato de inversión. Y, además, cuando se da el caso de excepción, porque se permite participar dentro de un plan promocional previamente establecido por la autoridad de aplicación, se cortan, durante todo el tiempo que se está beneficiando, las posibilidades de retorno del capital y de las remesas de utilidades.

También es conveniente señalar que en este proyecto la comisión ha introducido una reforma en el texto venido en revisión, no porque el artículo modificado estuviera mal hecho por los diputados, sino para señalar claramente la intención de afirmar, con acentuado énfasis, la vigorosa tesis sostenida por nuestra Corte Suprema de Justicia en un fallo reciente, que creo será rector dentro de la nueva interpretación y hermenéutica jurídica vinculada al quehacer económico del país. Me refiero al fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Parke Davis.

Es conocido que todas las teorías económicas, todos los planteos clásicos de la economía, están hoy hechos añicos por una realidad económica que excede, en su dinamismo, a la imaginación del propio teórico.

Recuerdo que Galbraith, que fue asesor del presidente Kennedy en sus planteos económicos, tenía escrito ya hace veinte años un libro que se llama *Lo liberal*, en el que hacía con maestría una crítica despiadada del liberalismo, y con una ironía realmente increíble iba mostrando como el hombre de teoría vive tan aferrado a ella que niega los datos de la realidad; y cómo lo que estaban proclamando los liberales de la economía era desmentido en su propio modo de intervención creciente en la conducción económica.

Uno de los aspectos que han pulverizado las teorías económicas clásicas y hacen que los economistas actuales no sepan explicar con igual coherencia y respuesta afirmativa el fenómeno económico mundial, es que precisamente sucede en el terreno de la teoría un poco lo que nos ocurre a los hombres de derecho en el campo de las instituciones. La evolución de la tecnología ha provocado tal expansión en la concentración del poder económico y dilatación de la economía de escala de los procesos productivos, que ha dado lugar al surgimiento de este fenómeno de las llamadas empresas multinacionales, que lo son para todos los que las sufren, aunque generalmente son nacionales para los que reciben sus beneficios; su origen nacional se encuentra en los países dominantes, que cuentan con poderío financiero y con un mercado propio interno que les permite conjugar la experiencia inicial de una economía de escala, ya que tienen la estructura de gestión que, aunque no parezca, es una de las grandes herramientas para el desarrollo y el crecimiento de un proceso industrial. En la multiplicidad de sus factores y de sus campos de acción, abarcan realmente las empresas multinacionales un ámbito universal que a veces escapa hasta al control de sus propios gobiernos.

Cuando se advierte en el mundo la existencia de centros que están constituidos exclusivamente para infringir la legitimidad fiscal de cada una de las realidades nacionales, como puede ser el famoso Bahamas, o las cuentas secretas de Suiza u otros países que están estructurados exclusivamente para la burla de los fiscos nacionales, se percibe claramente que los países tienen que defenderse. Esta jurisprudencia de Parke Davis se aparta de la simulación jurídica, porque más allá de la diversidad de personas jurídicas que pueda haber, se ajusta a la realidad del vínculo económico o del sometimiento, o del centro de gestión, y no admite que se impute a costos lo que son utilidades para el país inversor, aunque se vista con otro rótulo o se llame de otra forma.

Cuando un país recupera, a través de la interpretación jurídica de su más alto tribunal, su capacidad de verdad y autenticidad, creo que puede caminar por los rieles de la confianza en sí mismo.

El proyecto de nuestra comisión, que cuenta con el voto unánime de sus miembros, modifica totalmente el artículo 26, al que reemplaza, y en su último párrafo recoge el sentido de esa jurisprudencia que, por cierto, no ha estado ajena a la mentalidad de nuestros legisladores de la Cámara baja. Pero el hecho feliz de la aparición de esta jurisprudencia antes de nuestro despacho, despertó en todos los miembros de la comisión una inquietud por afirmarlo y receptarlo en su texto legal: «No se comprenden en este artículo las relaciones entre filiales o

sucursales y sus casas matrices o entre aquellas, así como también cuando exista relación orgánica de dependencia entre la empresa local y la del exterior, en cuyo caso las contribuciones financieras, tecnológicas o de otra índole entre las mismas, cualquiera sea su calificación jurídica, se regirán por las reglas que regulan los aportes y las utilidades, según fuere el caso».

La ley crea todo un régimen que significa carriles para una política industrial. No voy a entrar en el detalle, pero sí señalo, porque me parece que puede ser motivo de satisfacción el saberlo, que las prioridades están dadas fundamentalmente por la utilización de mano de obra nacional, la aplicación de tecnología argentina; la utilización de materias primas, productos intermedios u otros elaborados en el país; la contribución a la descentralización geográfica; que ciertos tipos de depósitos se hagan en el Banco Nacional de Desarrollo, y que en el contrato inicial se obliguen a la reinversión de utilidades. Estas son las seis pautas del sentido argentino de una política industrial. La preferencia, de hoy en más, va a regir en el manejo de la política industrial del país con rótulo argentino, y es satisfactorio poder informar un proyecto de ley en que campea lo propio y en que la unidad y la búsqueda recíproca del mayor énfasis de esa defensa ha sido casi la característica de todos nuestros diálogos en comisión.

Dije al comienzo que no iba a entrar en el detalle, tan explícito en el propio texto de la ley. Simplemente reitero aquí que si la comisión ha aconsejado prácticamente por unanimidad —porque la disidencia es parcial y no sustantiva en cuanto al propósito fundamental de la ley—, es porque nosotros nos sentíamos poseedores de un instrumento que le dábamos al país en un proceso de recuperación y porque difícilmente pueda sancionarse una ley en que converjan más el sentido de la técnica, el sentido de lo económico y el sentido de la forma jurídica, todo como valor instrumental para la razón fundamental de su objetivo común, que es el objetivo nacional y la síntesis de un gran espíritu de lo propio, con una gran vocación de protagonismo universal, que es la grandeza que vuelve a alentar la gran causa argentina.

Por eso pido el apoyo —si fuera por unanimidad, mejor— para este proyecto de ley. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

Sr. Pugliese. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Pugliese. — La exposición del señor miembro informante de la Comisión de Economía ha tenido la virtud de ahorrarnos una cantidad de argumentos que podríamos dar con respecto a los antecedentes que informan una ley de radicación de capitales extranjeros.

Lo ha hecho con la elocuencia que lo caracteriza y con profunda convicción, que comparto. De manera que voy a expresar nuestra disidencia

parcial —muy parcial— con respecto a algunos aspectos de la ley, pero siento la necesidad de hacer algunas consideraciones generales previas.

Tendríamos que preguntarnos primero por qué existe la necesidad de una ley de radicación de capitales extranjeros.

Podríamos decirnos —y esto es una escuela— que el país contó con el aporte de capitales extranjeros sin necesidad de que hubiera ley alguna, porque, dentro del mecanismo de lo que se llama la economía libre o la economía de mercado, entraban y salían con absoluta libertad, y el interés de la inversión extranjera estaba dado por el beneficio y la ninguna restricción para repatriar sus utilidades o capitales.

Es decir, entonces, que la necesidad de una ley de radicación de capitales extranjeros está dada, primero, por el hecho de la necesidad de esos capitales en el desarrollo de un país, y segundo, por las garantías que estos capitales exigen para poder radicarse en un país.

De manera que el primer planteo debe hacerse sobre el problema de la necesidad o no de los capitales extranjeros. Nosotros creemos que se trata de una polémica ya superada. Ya no se trata de hacer del capital extranjero una especie de dios que, por su sola presencia, realiza el desarrollo de un país determinado o cuya ausencia sume a éste en la miseria o la frustración. Creo que ya hay una doctrina pacífica. Estamos todos contestes en que el capital extranjero es solamente un aporte complementario de la economía. Tal vez existan matices, todavía, referidos a si una ley de radicación de capitales debe ser más o menos restrictiva de la incorporación de éstos, así como en cuanto al sentido de dichas restricciones.

A nuestro juicio debe repetirse, una y otra vez, que en el total de la inversión del país el aporte extranjero representa un porcentaje muy pequeño. Creo que no pasa del 4 por ciento en estos momentos. Esa es una cifra que hay que darla y repetirla a efectos de terminar con aquella teoría que establece que la ausencia de este aporte puede provocar un grave detrimento en el desarrollo de nuestra economía.

Por eso, incluso yo diría que esta misma ley, a la que me atrevo a calificar de buena, a pesar de algunas pocas deficiencias que contiene, mirándola, leyéndola, diríamos que cada uno de sus artículos podría ser testimonio de nuestra frustración.

Por eso los partidos políticos, sobre todo en estos últimos tiempos, han hecho a mi juicio una experiencia madura y jugosa, que se advierte en la lectura de sus programas partidarios. Si leyéramos todas las plataformas políticas con que cada uno de los partidos se ha presentado a elecciones en el país, advertiríamos qué extraordinario progreso se ha producido en este aspecto tan importante. Es decir que, tal como el país ha reclamado, sus representantes han ahondado y agudizado el análisis para tratar de

buscar las causas, como ha dicho muy bien el señor senador por Córdoba, de esta búsqueda que hace mucho tiempo la Argentina hace de sí misma.

La Unión Cívica Radical, en su convención nacional del año pasado, dijo que era necesario eliminar el proceso de extranjerización de nuestra economía, y recuperar la autonomía de decisión mediante una política independiente de los dictados del capital extranjero, de los organismos internacionales y de grupos minoritarios de intereses nacionales contrarios al bien de la comunidad.

Y aquí podríamos preguntarnos, siguiendo también la línea de pensamiento del señor miembro informante —quien con su exposición brillante me hará volver una y otra vez a su discurso—, si cuando colocamos esta cláusula, similar a la de otros partidos políticos de signo nacional, estábamos realizando un acto de xenofobia, una concesión a los que se denominan peyorativamente los ideólogos de los partidos; o si, al contrario, estábamos acertando con una necesidad que el país tenía.

Cuando nos referimos a los dictados del capital extranjero, es necesario interpretar esto no en un sentido literal, tal como está escrito, porque es probable que alguien pueda decirnos, con razón, que el capital extranjero en el país trabaja junto con el nacional, y no realiza dictados de ninguna naturaleza. Yo creo que el problema es más profundo.

No sé si lo que voy a decir ahora es cierto pero, a mi juicio, la causa de que no encontráramos durante este último tiempo una salida a lo que parecía un vacío político radica en que cuando el país preparó un proyecto nacional, una forma de modelo para desarrollarse, asentó las bases de ese desarrollo sobre el sector agropecuario; y, en consecuencia, éste representaba el porcentual más alto de ingreso nacional, más o menos 32 por ciento en 1916, mientras la industria manufacturera solamente cubría el 14 ó 15 por ciento.

Aquel sector tenía conciencia de su poder político y se caracterizaba por ser nacionales todos sus integrantes. Luego el país va avanzando y al producirse la crisis mundial de 1929 había caducado aquel proyecto desarrollado sobre la base de ser los proveedores de granos y carne para un mundo dominado por una metrópoli en crisis. Entonces el país tiene que encontrar otras formas, lo cual se traduce en la búsqueda, en las frustraciones políticas, en la toma del poder por medios no ortodoxos, todo ello a efectos de salvar aquello que se perdía por razón de los hechos. Así, la situación de preguerra y la existente durante la guerra obligaron al país a realizar un esfuerzo industrial, porque ya había terminado aquel triángulo clásico donde la Argentina se desenvolvía con comodidad, vendiendo sus granos y carnes, transformando las libras recibidas en dólares y

recibiendo los productos de una economía industrial.

Comienza entonces un desarrollo industrial no todo lo independiente que hubiéramos podido cesear. Al contrario, realizamos un desarrollo industrial en cierta forma dependiente sobre la base de una industria liviana que atendía al mayor confort y a la mayor disponibilidad de bienes de uso, y no estableciendo una industria de otras proyecciones como la que, en definitiva, debía marcar realmente la liberación económica de nuestro país.

Pero, de cualquier manera, en la década del 60 se invierte totalmente la relación de 1916. Ya no es el sector agropecuario el más importante en el ingreso nacional. Pasa a serlo el sector industrial, o manufacturero, que llega a un 35 por ciento contra el 16 por ciento del sector agropecuario.

Pero, ¿por qué el sector industrial no alcanza a tener la conciencia de poder político que tiene el sector agropecuario, el cual se ha formado la convicción de un modelo determinado de país? Yo me he dado una respuesta que no creo sea la verdad absoluta. Si se examinan los nombres y el número de las más importantes empresas industriales es posible advertir que ellas ya no son de capital nacional, como ocurría con la inversión en el sector agropecuario, sino de capital extranjero. Quiere decir que sus estrategias y decisiones no se elaboran en el país, sino fuera de él. No le interesa la toma del poder, sino ejercerlo a través de quienes representen sus intereses en el país.

Esta es una explicación que tal vez no esté suficientemente desarrollada; pero creo que alguna vez tenemos que arriesgarnos a lanzar nuestras ideas con respecto al fondo de nuestros problemas e, incluso, con el ánimo de que pueden ser controvertidas, y hagamos el debate por encima de las cosas que puedan preocuparnos delante de nuestros ojos, tratando de buscar entre todos la necesidad de un proyecto nacional que nos ponga, definitivamente, en el camino de nuestra autonomía de decisión.

En esta misma línea, cuando hablamos de capitales extranjeros, decía nuestra convención en el mismo capítulo de economía, e integrando el pensamiento que llevaba a reclamar la eliminación del proceso de extranjerización: «legislar sobre radicación de capitales externos en cuanto complementan el esfuerzo nacional, propiciando la elaboración de un régimen de inversiones extranjeras con sentido selectivo, que determine las áreas de inversión, las condiciones y porcentajes de participación, la obligación de incorporar equipos y tecnologías aptos para la dimensión del mercado argentino, las formas de remitir fondos al exterior, el término de repatriación de la inversión y el saldo positivo que la misma produzca a la economía nacional».

Como se verá, una rápida lectura del proyecto en consideración recoge fundamentalmente las pautas de la legislación que nuestro partido estableció para la radicación de capitales extranjeros.

De manera tal que en el modelo de desarrollo que concebimos su peso cae, fundamentalmente, en el ahorro nacional y en la participación activa del Estado, no como un Estado gendarme, sino como el promotor de las actividades económicas del país.

En consecuencia, la radicación de capitales extranjeros es puramente complementaria, y nos apartamos, así, de los otros dos modelos que se le ofrecen al país. Uno, podría ser el ortodoxamente liberal, aunque pienso que tal vez lo diga mal, porque no creo que exista actualmente en el mundo ningún ortodoxo liberal; pero sí, digamos, fundado en el liberalismo o en el neoliberalismo que da una gran amplitud a la radicación de capitales extranjeros, que estima de cualquier manera beneficiosa, entendiendo que la ley tendría que ser más amplia en sus articulados a efectos de no desalentar esa inversión, la que, por otra parte, se sostiene, y a veces con razón, no es tan abundante en el mundo entero y en ocasiones, en sus propios países, obtiene porcentuales de rendimiento tan buenos como los que pudiera lograr en aquellos donde quiera radicarse.

El otro modelo es el del desarrollo acelerado, es decir el uso del capital extranjero como factor de aceleración y colocado en los sectores básicos o dinámicos de la economía. De esta manera se sostiene que el capital extranjero le podría adelantar al país años en su desarrollo o evitarle una restricción de consumo que toda política que se funda sobre el ahorro nacional podría realizar para el caso de que quisiera hacerse este desarrollo con el mismo grado de aceleración.

Además, esta teoría se funda en la necesidad de romper el ahogo de nuestra estructura de balanza de pagos. Y, en consecuencia, la inversión de capital tiene que hacerse en aquellos sectores que provoquen sustitución de importaciones, para liberar divisas a efectos de poder importar los insumos que a veces produce la misma política de sustitución de importaciones, que es lo que nos va a liberar.

El otro modelo es el señalado en esta ley, y hemos estado de acuerdo en las coincidencias anteriores con respecto a un tratamiento complementario, que se refiere a una ubicación del capital en sectores y áreas predeterminados, vinculándolo además al aporte tecnológico, fundamental para los países en desarrollo. Pero no se trata de cualquier aporte tecnológico. Por eso dijo muy bien el señor miembro informante que entre las condiciones deseables era importante el mayor aporte de mano de obra nacional. Una tecnología recibida de cualquier manera,

en el estado actual de nuestro país, que por razones estructurales se encuentra con un porcentaje bastante alto de desocupación que debe ser absorbido, podría agravar este mismo problema. En cambio, hay una tecnología que puede vincularse al desarrollo tecnológico nacional, que en los primeros pasos toma y ocupa una mayor cantidad de mano de obra. Un altísimo desarrollo tecnológico podría colocarnos en situación de acentuar la desocupación.

Nosotros no necesitamos decir, por supuesto, que adherimos a este modelo y no a los otros que, cuando fueron aplicados, no demostraron una gran ventaja.

Por otra parte, se funda también en las consideraciones ciertas de una división internacional del trabajo que hace que los países que venden productos primos, materias primarias, sufran un deterioro de los términos del intercambio cuando deben comprar productos industriales. No digo que esta tendencia se haya invertido o cambiado fundamentalmente; pero es cierto que en el mundo está pasando algo y que, incluso con las proyecciones que ya se hicieron en 1960, contrariamente a lo que se sostenía como necesidad de abandonar un gran esfuerzo en la producción alimenticia o del agro, se está demostrando que las políticas contrarias a este aumento de la producción nos descolocan, porque se han cumplido aquellas proyecciones del año 60 y nos encontramos con un mundo cada vez más ávido de alimentos, que nosotros no podemos satisfacer.

Es decir, que la política correcta a seguir hubiera sido realizar y no proclamar solamente la armonía entre el agro y el desarrollo industrial, aun pensando que, al final del proceso, el agro tiene que cumplir la función de proporcionar alimentos en términos relativamente económicos para que nuestra industria pueda actuar competitivamente en el exterior, y no recibir la presión de demandas salariales como consecuencia del precio elevado de los alimentos. También en este momento es un factor importante por el saldo exportable, sobre el cual puede fundarse una política independiente y de aceleración del desarrollo industrial.

Las teorías no son tan rígidas y debe existir el necesario pragmatismo para establecer, en cada momento de nuestra trayectoria, qué es lo más adecuado o cuál es la política mejor a aplicar. Quiere decir que, a través de esa ley de radicación de capitales extranjeros, estamos expresando todo un contexto de problemas vinculados a ellos. Porque una ligera crítica que yo le haría es, fundamentalmente, que debió venir junto con un plan de desarrollo o como quiera llamársele, en el que estuvieran indicados los porcentajes, los sectores y lugares en los cuales se iba a financiar con inversión externa.

De cualquier manera, pensamos que el Poder Ejecutivo ha preferido tener este instrumento, porque sobre la base de que los sectores del país

están dibujados, por lo menos, aunque no estén escritos —pero lo han estado—, conviene señalar al mundo cuál va a ser la ley de juego en la Argentina.

La primera teoría sostiene, además, que la radicación en cantidad de capital extranjero no depende tanto de la ley sino de la estabilidad monetaria que el país tenga.

Nosotros pensamos que no es así, sin perjuicio de creer que es posible alcanzar una estabilidad monetaria cierta. Pero si ponemos delante la estabilidad monetaria, corremos el peligro —por otra parte ya ha sucedido— que cuando se ha querido alcanzar esta estabilidad por métodos puramente monetarios hemos originado tensiones sociales que han producido un gran desorden en el país y que han alejado mucho más rápidamente a los capitales extranjeros; ellos vienen, fundamentalmente, cuando el país tiene estabilidad política. Es decir, que lo importante para el país es alcanzar la permanencia de sus instituciones. De ahí que nosotros sostengamos que la Argentina debe alcanzar su estabilidad, y lo demostrará ante el mundo el día que el presidente que elijamos ahora, entregue el mando. al final de su mandato, al presidente que haya elegido el pueblo, y así sucesivamente. Entonces, quizá, todas estas leyes resulten poco innecesarias y servirán simplemente para establecer, por quienes tienen la obligación de proyectarlo, un plan económico que especifique las áreas y lugares donde la inversión prioritaria del Estado o extranjera se va a volcar, para obtener ciertos resultados en un periodo determinado.

Es decir, que todas las teorías pueden tener su parte de verdad. Pero en este momento, a nosotros nos satisface, en general, esta ley que está en consideración. Ella ha recibido críticas de un lado y del otro; tal vez esto demuestre su bondad. Porque por un lado se sostiene que esta ley, aplicada por un gobierno que no tenga interés, puede también realizar una política contraria a los intereses del país, dadas las amplias facultades que en algunos sectores se le otorga.

Por el otro lado, se dice que contiene tantas restricciones —en algunos capítulos trata mal a los capitales existentes en el país— que podría hacer que esos capitales no vinieran u otros abandonarían el país para radicarse en el exterior.

Nosotros entendemos, por el contrario, que con el capital existente no solamente no ha sido restrictiva, sino un poco lenitiva, y pienso que con alguna prudencia podría aceptarse que fuera así.

Pero, de cualquier manera, la alta tasa de interés fijada para la remisión de utilidades, del 12,5 por ciento, más alta que la media de América, podría ser en algunas empresas existentes acá mayor que ese porcentaje, porque ganan mucho más y el impuesto que se les aplica no alcanzaría a cubrirla.

Pienso que esos artículos no están dirigidos directamente hacia un propósito fiscal sino a

favorecer y desarrollar una política de renacionalización de estas empresas, de manera tal que en un período de tiempo determinado todo este aporte esté otra vez en manos nacionales, o por lo menos en parte muy importante.

Es decir que nuestras observaciones, muy pocas, están referidas a algunos problemas, por ejemplo cuando se trata de servicios.

Pienso que el de servicios era uno de los rubros favoritos de los inversores de capital de principios de siglo. Creo que hay muy poco capital extranjero que se invierte en eso ahora, porque aparte de haber tenido bastantes dificultades, son otros los tipos de inversión. En cambio, si se justificaría, tal vez, que esto estuviera en el Pacto Andino, en el Acuerdo de Cartagena, porque esos países con un menor desarrollo relativo que el nuestro comienzan una actividad donde recogen una gran experiencia de los otros países que tuvieron antes este inicio de desarrollo, y han establecido bien claro en el acuerdo que, deseando realizar un mercado común y una complementación de sus propios recursos económicos, era importante legislar sobre capitales extranjeros, de manera tal que éstos no fueran los beneficiarios de los acuerdos que efectuaban dichos países integrantes del Pacto Andino. Por eso pusieron como prohibiciones los servicios públicos, etcétera.

Nos pareció a nosotros que era mucho más importante precisar, en esta materia, una política sobre hidrocarburos y los materiales críticos para energía nuclear.

No desconozco que el inciso 6 del artículo 69 establece la prohibición de radicación en las actividades que por ley estén reservadas a empresas estatales o a empresas de capital nacional.

Pienso que con este inciso estamos diciendo que las actividades que la ley acuerda a YPF serán materia prohibida de radicación, a pesar de que en la Cámara de Diputados se dio la explicación de que no se prohibía, porque podía haber alta tecnología que resulte necesario importar. De manera que esto tal vez convendría dejarlo precisado.

Después recogemos, en el artículo 69, inciso 7, la prohibición de raditaciones en actividades agrícola-ganaderas y forestales, salvo las que incorporen tecnología nueva de especial interés para la economía nacional, a juicio de la autoridad de aplicación.

No quiero hacer una observación que pueda ser objetada de suspicaz, pero de cualquier manera nosotros tenemos que preservar las actividades agrícola-ganaderas. Yo diría que es el sector donde mejor se ha desarrollado, en muchos aspectos, una tecnología nacional. No digo que no puedan todavía recibir aportes tecnológicos. Pero esa tecnología que pudiera recibirse es una de las observaciones que se hace a este proyecto, que no era muy preciso en materia de desarrollo tecnológico, y se contesta, a mi juicio con razón, que el problema iba a ser objeto de una ley

aparte. Me parece que está bien que esté tratado en un aparte, donde se pueda contemplar, pero aquí deja una puerta abierta a una radicación en actividades agrícola-ganaderas que, de alguna manera, se inició en el país y que había que cortar de raíz, sobre todo, y en esto no creo decir una novedad, porque es lo que hemos sostenido cuando tratamos la ley de granos y seguramente lo sostendremos cuando analicemos la ley de carnes.

Creemos que el Poder Ejecutivo, en los proyectos que ha enviado al Congreso sobre el agro, revela una cierta agresividad que puede no obtener los resultados que persigue con ellos.

No le hago el cargo de intención. Simplemente expreso que objetivamente, tal cual ha sido modelada la primera política agraria que ha enviado el Poder Ejecutivo, constituye a mi juicio una agresividad que puede no dar los resultados apetecidos. Porque a través de la mayor presión fiscal y de la no fijación de una política de fondo hacia el futuro, o de la no utilización del esfuerzo nacional realizado y que se traduce en la alta tecnología desarrollada en esa materia, y si se pretende crear los fantasmas ante el país de que el agro está formado por una cantidad de gente enemiga del progreso del país, podría producirse un desaliento transitorio que abriera las puertas de una radicación totalmente inconveniente.

De ahí que pensemos, y lo diremos en la discusión en particular, que sería conveniente no dejar esa puerta amplia que abre el inciso 7. No me refiero a la parte de pesca, en la que podría existir la misma posibilidad, porque el señor Solari Yrigoyen se va a referir también a ese tema en la consideración en particular.

En síntesis, señor presidente, estamos de acuerdo en general con la ley. Las razones que hemos dado las consideramos suficientes. Nos ha complacido coincidir en la Comisión de Economía, en lo que creo es el último de los proyectos que teníamos en consideración, y al respecto me agrada ratificar las palabras del señor senador miembro informante en cuanto a que hemos traído despachos a esta Cámara sobre asuntos realmente muy trascendentes para la vida del país. En algunos de ellos hemos coincidido plenamente, en otros hemos señalado nuestras divergencias, pero lo cierto es que hemos trabajado, me complace en decirlo públicamente, como lo que siempre soñé era una auténtica comisión senatorial.

De manera, señor presidente, que acompañaremos a la mayoría en el voto de esta ley en general y haremos luego algunas observaciones cuando se trate en particular.

Nada más, señor presidente. (*¡Muy bien!*)

Sr. Frugoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Frugoli. — Señor presidente: el análisis del tema sobre el que versa el proyecto que la Cá-

mara tiene en consideración, es sumamente complejo. Está vinculado con muchos aspectos y posee implicancias técnicas que le son propias. A ello hay que agregar que tiene indudablemente un alto contenido político, en razón de la estrecha vinculación que guarda con el principio de la soberanía política. Por eso, se trata de un problema que posibilita una muy extensa exposición.

Tendríamos que comenzar refiriéndonos a la evolución histórica de las inversiones extranjeras en América latina y, particularmente, en la República Argentina.

También deberíamos analizar algo que yo considero fundamental, mucho más importante que la estructura legal que estamos considerando y que vamos a sancionar: la política económica general que el Poder Ejecutivo aplique y dentro de la cual debe insertarse el problema de las inversiones extranjeras.

Además, tendríamos que ocuparnos del arduo, encendido y permanente ataque ideológico en contra del capital extranjero, particularizar en su examen y referirnos a los dos argumentos principales con los que se ha dado sustentación intelectual a legítimos sentimientos de recelo y de hostilidad hacia el capital extranjero: la teoría del vasallaje o la dependencia y la teoría del estrangulamiento del sector externo.

Tendríamos que referirnos así mismo a algo que también considero más importante que la propia ley que vamos a sancionar: la aptitud técnica, la vocación patriótica, el sentido nacional de los funcionarios que tienen a su cargo la atención del problema de las relaciones del Estado con los inversores extranjeros. En ocasión de tratarse el proyecto de ley en virtud del cual se creaba un registro de personas vinculadas con empresas extranjeras, yo dije que no le temía al capital extranjero, y ahora quiero decir por qué. No le temo porque tengo confianza en la eficacia, en el sentido nacional y en el espíritu patriótico de los hombres que gobiernan a mi país. Yo sería desleal con el régimen democrático y prejuzgaría si hoy no hiciera aquí, con motivo de este debate, la manifestación que acabo de formular. Si los hechos me demuestran algún día lo contrario, lo diré con la misma claridad con que en este momento confieso mi fe en los funcionarios del gobierno nacional. Creo que ésta es la clave del problema, a tal punto que, en realidad, esta ley de inversiones extranjeras debería tener un solo artículo o, a lo sumo, dos: el primero que dijera que el país acepta la inversión extranjera; y el segundo, que los inversores extranjeros ajustarán su conducta a las disposiciones legales en vigencia o a las que se dicten en el país.

Esto no es una novedad. Hay países, como Japón, donde no existe una regulación normativa estable con respecto a este tema. Permanentemente los funcionarios, que conforman un equipo de alrededor de doscientos técnicos, van resol-

viendo cada caso que se presenta y creando una suerte de jurisprudencia administrativa, lo que es un sistema sumamente práctico y que da muy importantes resultados.

No considero indispensable referirme en detalle a todos estos aspectos, ni tampoco querría abrir una polémica sobre algunas apreciaciones históricas que ha hecho el señor miembro informante, cuya exposición he seguido con el interés con que escucho todas las que realiza porque conozco su seriedad, su versación, y porque, además, como le he expresado alguna vez personalmente, pone mucha calor y convicción en lo que dice.

Pero sin ánimo polémico, con toda cordialidad, y un poco para salvar mi posición, tengo que violar una norma que me he trazado de no entrar en debate sobre juicios referidos al proceso histórico económico del país, pero creo —y por eso violo la norma— que las inversiones extranjeras en la Argentina, particularmente las que se realizan inmediatamente después de la organización nacional, han sido útiles, han facilitado que el país, que en ese momento carecía en absoluto de recursos, creara una infraestructura que le permitió dar un gran salto en el proceso del desarrollo de todas sus potencialidades.

Esto me permite afirmar que es injusto señalar que la dependencia posterior es el resultado de aquellas inversiones extranjeras. Es cierto que se crea un sistema de ferrocarriles en forma radial; ésta es una teoría exacta que en el país se ha repetido muchas veces, y seguramente se seguirá repitiendo porque explica en forma simple un fenómeno complejo. Pero creo que, si bien ese sistema tendía a satisfacer las necesidades de materia prima de los grandes centros industriales de la época, hay que destacar que no tenía en ese momento mucho sentido crear una red de ferrocarriles distinta que uniera a desiertos entre sí. Por otra parte, facilitó el transporte de los productos agrícolas y ganaderos. Causó daño, es cierto, que aquí no ha sido señalado, y es que mató la incipiente producción artesanal del interior del país, que sin duda podía ser la base de un ulterior proceso de industrialización regional. Este sí, creo, fue el gran daño que se le hizo al país.

Sin abundar en más detalles —porque, reitero, no quiero entrar en una exposición pormenorizada de este problema— quiero expresar que existen testimonios fehacientes de la época, de que ya entonces había argentinos lúcidos que tenían la preocupación de la industrialización del país.

Hay un debate memorable del año 1875, que lamentablemente no recuerdo en detalle, porque no pensaba entrar en este tema, en el cual Vicente Fidel López y Carlos Pellegrini, con extraordinaria clarividencia, al discutirse un artículo referido a aranceles aduaneros, que se

incluía en la ley de presupuesto de ese año, hacen una fervorosa defensa de la industria nacional, propician que se siga una política proteccionista y señalan, ya en aquel momento, con otro lenguaje, por cierto, lo que ahora en términos técnicos se llama el «deterioro de los términos del intercambio».

Es decir, que aquello no ha sido tan negro ni tan negativo. Esto lo digo —reitero— sin ánimo de polémica y respetando mucho las opiniones que se han emitido. Lo destaco porque de no hacerlo quedo con la sensación de no haber dicho lo que pienso y de no haber rendido lo que yo creo es un acto de justicia histórica a figuras de la talla de Vicente Fidel López y de Carlos Pellegrini.

No voy a continuar en el tema histórico porque, repito, es muy extenso y creo que lo que la Cámara debe hacer en este momento es encarar el problema concreto del estatuto legal que se va a sancionar.

Decía yo que la política económica que trace el país es decisiva con respecto a las inversiones extranjeras. En ese sentido, y para actuar «armónica y equilibradamente», tenemos que plantearnos varios problemas que son a la vez interrogantes, y de cuya respuesta resultará el esquema o programa a estructurar en esta materia y que haya afluencia o no de auténtico y genuino capital extranjero que se sume al proceso del desarrollo nacional.

Creo que tenemos que empezar por preguntarnos algo que ya ha tenido respuesta aquí por boca del señor miembro informante y del señor senador doctor Pugliese; si consideramos que tiene realmente relevancia la inversión extranjera en un proceso de desarrollo o si, por el contrario, ese desarrollo lo vamos a hacer hacia adentro, en base exclusivamente al ahorro nacional. Estimo que aquí, con diferencia de matices, se ha reconocido la necesidad de la inversión extranjera. De todas maneras, quisiera decir dos palabras sobre el tema del ahorro interno. Se calcula que en este momento la tasa de ahorro interno es del orden del 20 por ciento, que resulta elevada y propia de países industrializados. Pero esto se da porque se computa el ahorro y el consumo a precios constantes de un año base. Y ocurre que se omite señalar que la tasa real de inversión es igual a la tasa de ahorro únicamente haciendo el cómputo, en las cuentas nacionales, en función del año base, como podría ser, en nuestro caso, 1960. Pero es evidente que si los precios relativos entre los bienes de consumo y los de inversión del año corriente son distintos de los del año tomado como base, si no se hace el ajuste estadístico la tasa de inversión aparece nominalmente más alta de lo que en realidad es. Esto ha quedado claramente establecido en trabajos estadísticos publicados, según los cuales en este momento la tasa de inversión interna del país oscila en alrededor del 10 por ciento de la demanda global.

Además, se considera como inversión a los *stocks* a la variación de existencia; pero sucede que en un proceso inflacionario ella no constituye inversión reproductiva sino especulativa.

Por otra parte —para evaluar la necesidad de inversión extranjera—, aun en el caso de que la tasa de ahorro interno fuera alta, tenemos que considerar que no siempre los productos que no se consumen son exportables, porque no tienen demanda internacional, lo que hace que ese ahorro no provea las divisas necesarias para atender los servicios de la deuda pública, afrontar las cuantiosas importaciones de bienes intermedios y de capital, sin las cuales el país se paralizaría, y así mismo mantener un nivel adecuado en las reservas monetarias.

Por otra parte, el gobierno nacional está empuñado en una política económica de redistribución de ingresos, lo que estimula el consumo y no el ahorro. Aclaro que yo estoy de acuerdo con esa política de redistribución de ingresos por razones de carácter social y también porque desde Keynes todos sabemos que comprimir el consumo popular no significa aumentar la tasa de ahorro sino deprimir la oferta global y, consecuentemente, la demanda global, lo que significa recesión. De manera que creo que el ahorro interno debe ser complementado con la inversión extranjera y en una proporción significativa, porque de esa manera lograremos lanzar al país hacia el desarrollo de todas sus posibilidades.

Todo esto nos lleva a la consideración de otro interrogante que debemos formularnos: cuál debe ser la orientación de la inversión extranjera, es decir, hacia qué sectores de la economía hay que dirigirla. Puede ocurrir que haya una corriente importante de inversiones extranjeras que vaya a aquellos sectores de la economía que pueden ser atendidos por el capital nacional y que no produzcan, entonces, todos los beneficios que de la inversión extranjera se esperan. Nosotros tenemos que determinar un orden de prioridades, fijar los sectores estratégicos de la economía, aquellos que demandan una gran concentración de capital, alta tecnología o aquellos sectores que son grandes riesgos o de rápida obsolescencia, para orientar hacia ellos el capital extranjero.

Tenemos que analizar también otro aspecto muy importante, que es el volumen de la inversión extranjera, porque puede ocurrir que tengamos un volumen excesivo, con un peso notable sobre la renta nacional, o que sea manifiestamente insuficiente y no actúe, entonces, sobre aquellos sectores claves de la economía que puedan posibilitar un crecimiento autosostenido del ingreso nacional.

Hay que tener en cuenta también la estructura de la inversión externa. Hay que determinar en qué proporción deben promoverse las llamadas inversiones directas, es decir, en bienes y en equipos, y en qué proporción aceptarse las inversiones financieras. Ha habido etapas en las que la inversión financiera fue muy alta,

lo cual no resultó útil al país, pues se jugó dentro de un esquema especulativo, o se dirigió a sectores que podía atender muy bien el capital nacional.

También es conveniente considerar, o por lo menos plantearse, si deben hacerse discriminaciones con respecto al origen de las inversiones extranjeras. Daría la impresión de que hay quienes piensan que las inversiones extranjeras hay que tenerlas en cuenta según el país del que provengan, aunque se trate de empresas multinacionales, porque las de unos países serían mejores que las de otros. Yo tengo al respecto opinión formada, pero creo que éste es otro tema, que también oportunamente debe ser analizado.

Así mismo debe tenerse en cuenta si la estructura jurídica de algunas empresas que han venido o pueden venir al país resulta útil o perjudicial para la economía nacional.

Finalmente habrá que tener muy en cuenta si en función de las respuestas que demos a estos interrogantes, lograremos o no una oferta de inversión extranjera adecuada a los requerimientos nacionales.

Quiero mencionar algunos ejemplos históricos —que demostrarían algo de lo que estoy diciendo— ocurridos durante los últimos 25 años, a partir de la segunda etapa de la política económica del general Perón, dirigida por el actual presidente del Banco Central, doctor Gómez Morales. Desde entonces, y hasta el último gobierno militar, es interesante analizar lo que ocurrió en orden a las inversiones extranjeras, pues en una especie de *racconto* veríamos aparecer todas las alternativas respecto de los interrogantes que nos estamos planteando. Sería útil, porque podríamos extraer lo positivo para no reincidir en lo negativo.

Debo decir al respecto, en un rapidísimo pantallazo y sin ánimo polémico, que en el año 1952, aproximadamente, se inicia esa segunda etapa en la política económica del gobierno del general Perón. Se sanciona entonces la ley 14.222, que jugó positivamente en función de los objetivos fijados por el Segundo Plan Quinquenal. Establecía la ley que serían consideradas de interés nacional las industrias de alta eficiencia técnica, y en sus fundamentos se declaraba que el capital extranjero tendría la rentabilidad que legítimamente pudiera corresponderle, y un trato ecuatorial e igualitario.

Esta ley alentó a la inversión extranjera y la puso al servicio del desarrollo nacional, al mismo tiempo que desalentó la desinversión y la repatriación de capitales, como que no determinó de ninguna manera un endurecimiento respecto de las inversiones anteriores a la ley. Disiento cordialmente de la opinión del doctor Pugliese en cuanto a que tengamos que endurecernos en el trato con las radicaciones de capital ya producidas en el país.

Digo que disiento del doctor Pugliese porque creo que esas radicaciones se produjeron respetando un determinado ordenamiento legal. Aquí no llegó el inversor extranjero para meterse a la fuerza en el país y producir la inversión; vino porque quienes en ese momento tenían el ejercicio del poder en sus manos se lo posibilitaron. Entonces no parece legítimo hacer pagar los efectos distorsivos que pudieron haberse producido a quienes no son responsables. Yo siempre he dicho que no se puede desconocer que si el interés foráneo avanzó como lo hizo —y como aún avanza— por el camino del abuso, fue porque quienes tuvieron la responsabilidad de detenerlo no lo hicieron, faltando así al primer deber del patriotismo, que es velar permanentemente por el interés nacional.

Debemos partir de la base de que el inversor extranjero no está exento del pecado original y por tanto no actúa santamente. Tiene las mismas apetencias de lucro que generalmente tienen todos los hombres, en su caso acentuada notablemente porque se trata de organizaciones económicas y financieras de un gran volumen; pero ello no debe asustarnos ni extrañarnos sino alertarnos. De esa manera, la ley 14.222 daba una solución ecuatorial y realista y, fundamentalmente, tenía en cuenta la atracción y el estímulo del capital extranjero, a diferencia de lo que parece ocurrir con esta ley, que atiende más a la participación del empresario local en las inversiones extranjeras.

Durante el lapso que va de los años 1951 a 1955 se producen inversiones extranjeras por un monto aproximado a los 400 millones de dólares. Es claro que de estos 400 millones de dólares el 80 % estaba determinado por importaciones de bienes sin uso de divisas, porque se recordará que en aquella época existían los llamados permisos de cambio y los permisos de importación. El gobierno, en estos casos, daba el permiso de importación y no el de cambio, y en esa forma entraban los bienes. Creo que no es suspicacia pensar que quienes traían bienes en esas condiciones lo hacían porque habían obtenido o comprado divisas evadidas del comercio internacional, y en esa forma se introducía ese capital al país. Es decir, que habría ocurrido algo similar a lo que parecería —digo así porque no está todavía suficientemente demostrado— que hubiera ocurrido con la Corporación Argentina de Productores de Carnes, con la diferencia de que en este caso esas divisas negras volverían en concepto de préstamos.

El período siguiente es el de la revolución de 1955, caracterizado por una depresión en orden a las inversiones extranjeras. En esta época el país ingresa al Fondo Monetario Internacional obteniendo de allí un préstamo y otro de la Tesorería de los Estados Unidos de América y otras entidades bancarias, siendo éstas las únicas inversiones externas puramente financieras que entran al país. La situación era de inestabilidad;

fue necesario consolidar y renegociar los saldos deficitarios que el país tenía a través de los convenios bilaterales y se firmó el acuerdo de París con países europeos y con el Japón para resolver este problema.

Sr. Maya. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Frugoli. — Sí, señor senador.

Sr. Maya. — Con respecto al tema de los saldos negativos de los convenios bilaterales, quiero decirle que eso obedeció a que no se cumplieron los acuerdos como se habían acordado, sino que se cortaron abruptamente. De manera que quedarán saldos que de otra forma no los hubiera habido. Fue una mala política, una política equivocada.

Sr. Frugoli. — Estoy señalando un hecho que usted acepta. Considero su interpretación, pero el hecho existió, y yo creo que esos saldos constituían la utilización por el país de excedentes sobre los límites convenidos.

Sr. Maya. — A nosotros nos interesa mucho establecer las razones que los motivaron.

Sr. Frugoli. — Usted ha hecho una interpretación. Pero yo dije que mi exposición era sin tono polémico. De manera que estas interpretaciones siempre son útiles.

Posteriormente, en la época del doctor Frondizi, hay un gran flujo de inversiones externas del orden de los 1.300 millones de dólares que entran en la forma de radicaciones de bienes físicos. Diría yo que fue positiva en cuanto a que significó substitución de importación de petróleo y modernización del equipo industrial. Pero fue tremendamente negativa, sobre todo en lo que se refiere al balance de pagos, porque las importaciones con pagos diferido se hicieron sobre la base de financiaciones a muy corto plazo que empezaron inmediatamente a gravitar sobre el balance de pagos.

Además, en esta época se produce el mismo fenómeno que se produjo en 1955; se recuerda que en la época de Perón el dólar estaba a 5 pesos tipo vendedor y 7 pesos tipo comprador. El gobierno de la revolución produce una devaluación y lleva el dólar oficial a 18 pesos, y establece el mercado financiero libre, en el que el dólar se cotiza inmediatamente a 31 pesos. Ello produce un considerable flujo de capital líquido especulativo.

Durante la época del presidente Frondizi, tiene lugar también una gran devaluación —de 40 a 80 pesos el dólar— y se produce el ingreso de la llamada *hot money*, o dinero caliente, que llega también para especular con las diferencias en las tasas de interés de Europa y de nuestro país y, además, con la tranquilidad que una devaluación de tan amplio margen le da para hacer ese tipo de inversiones de corto plazo. Esto también fue negativo durante la presidencia de Frondizi y hasta mediados de 1961.

El gobierno de Illia —y aquí voy a pasar muy rápidamente, porque no quisiera de ninguna ma-

nera meterme en la boca del león— hereda un poco esta situación pero, a decir verdad, la resuelve con serenidad, de la única manera posible, llevando a cabo una política monetaria y una política de cambio también muy prudente, caracterizada por pequeñas devaluaciones. Se refinancia la deuda externa y se emiten bonos externos para tratar de afrontar el tremendo peso que significaba sobre la balanza de pagos el pago de regalías, intereses y dividendos, fruto de las inversiones realizadas durante el gobierno del presidente Frondizi.

Yo creo —y ésta es una apreciación que se funda más bien en razones de carácter económico que político— que el error que se comete en esta época —y lo digo con toda cordialidad— fue la anulación de los contratos de petróleo, porque significaron con posterioridad el pago de indemnizaciones y además produjeron fuga de capitales que fue, si no me equivoco, de alrededor de 300 millones de dólares.

Llegamos finalmente a la última etapa, el período de Krieger Vasena en que se producen inversiones en forma de capital líquido de muy corto plazo. Hay una tremenda devaluación que favorece también la llegada de *hot money* para hacer especulaciones con tasas de interés en áreas no muy reproductivas.

De manera que esta historia, muy somera, nos está demostrando que hay una gran experiencia para dar respuesta a todos esos interrogantes o problemas que nos planteamos hace un momento y que el gobierno tendrá que considerar para formular esa política económica global, que es decisiva.

Sr. Pugliese. — ¿Me permite una interrupción, señor senador, así me ahorro un discurso después?

Sr. Frugoli. — Como no, señor senador.

Sr. Pugliese. — El señor senador está haciendo una muy buena exposición sobre el *racconto* económico de nuestros últimos tiempos, en la que, de alguna manera, nosotros no hemos querido entrar. Pero al hacer referencia a una época determinada, me obliga a mí a dar algunas muy ligeras explicaciones.

Dice el señor senador que, como consecuencia de la anulación de los contratos petroleros, se produjo una fuga de capitales. Yo diría que no es exactamente así o, por lo menos, no es ésa la única causa. En el año 1961 —y eso está en la memoria del Banco Central del año 1962— habían huido del país más de 700 millones de dólares, y en el mes de enero de 1962 estaban por salir también 90 millones de dólares.

Hay una carta del presidente del Banco Central, reproducida en la memoria, dirigida al ministro de Economía de entonces, doctor Coll Benegas, donde se señala la necesidad de tomar medidas con respecto a este problema, que había colocado al Banco Central en una situación crítica en cuanto a la tenencia de reservas en divisas.

La anulación de los contratos de petróleo no ha producido por sí misma una fuga de capitales, y el señor senador debe recordar que el gobierno del doctor Illia —y yo puedo hablar de ello, porque no era su ministro entonces— estableció lo que llamamos el control de cambios, en abril de 1964. Es decir, empezamos a salir de un mercado con amplia libertad, y a controlarlo...

Sr. Frugoli. — Yo señalé que fue una política prudente.

Sr. Pugliese. — Es posible que así sea. Pero le digo que hay cifras que nos indican que el 31 de diciembre de 1962 el país tenía una posición negativa neta de 472 millones de dólares, si mal no recuerdo. Nosotros, al 30 de junio de 1966, con esta política de anulación, control de cambios y sistema gradual del manejo del tipo de cambio —no de *shock*, como en la época del doctor Frondizi, en la del doctor Guido y luego en la del doctor Krieger Vasena, con los mismos resultados en las tres oportunidades—, dejamos al país con una posición neta favorable de divisas de 100 millones de dólares, después de haber pagado la última cuota del famoso Club de París, que la abonamos dos días después que nos echaron, porque todavía no se habían hecho cargo las nuevas autoridades del Banco Central.

Es decir que aquella política había favorecido al país en 572 millones de dólares de recuperación de su posición neta de divisas. Y en cuanto al perjuicio que pudo haber producido la anulación de los contratos petroleros, es un tema que no discutiremos ahora; no deseo entrar en esa discusión; pero voy a señalar dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, un año antes de que nosotros asumieramos el gobierno, la compañía más importante de producción de petróleo había dejado de producir porque YPF no le pagaba, porque los contratos que la obligaban a recibir cualquier cantidad y en cualquier tiempo lo que se produjera habían hecho que la empresa estatal no tuviera ya depósitos para recibir y suspender los pagos y la producción.

Pero, por si hubiera habido un perjuicio, yo repito, para terminar, las palabras del doctor Balbín en una conferencia pronunciada en la Universidad del Salvador, cuando un joven estudiante le preguntó qué perjuicio había ocasionado al país la anulación de los contratos petroleros. El doctor Balbín le respondió en esa oportunidad, que él nunca se había detenido a averiguar cuánto había costado la guerra de la Independencia.

Muchas gracias.

Sr. Maya. — ¡Muy bien! ¡Muy bien!

Sr. Presidente (García, A. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Frugoli.

Sr. Frugoli. — No entraré en el análisis de este tema, como muy bien dijo el señor senador porque no es el momento adecuado. Me parece

muy buena la frase del doctor Balbín, como que proviene de un gran dirigente político. Por el que siento gran respeto. Pero en materia económica, prefiero manejarme con resultados.

Sr. Pugliese. — La del doctor Balbín es algo más que una frase, porque viene precedida de un hecho.

Sr. Frugoli. — Repito lo que dije anteriormente, señor presidente. Creo que en materia económica hay que manejarse sobre la base de indicadores económicos para lograr resultados positivos en cuanto al bienestar del pueblo...

Sr. Pugliese. — Con la fe del país.

Sr. Frugoli. — ...sin dejar de reconocer que pudo ser una frase muy feliz.

Sr. Maya. — Pensando en la soberanía del país.

Sr. Presidente (García, A. A.). — La Presidencia le ruega al señor senador Frugoli que continúe con su exposición.

Sr. Frugoli. — Pero el doctor Perette me ha pedido una interrupción y se la concedo con mucho gusto.

Sr. Perette. — Sostengo que la nulidad de los contratos de petróleo fue un acto de soberanía, un acto indeclinable de una Nación que tiene la plenipotencia de sus poderes, pero que representó también un acto económico favorable y fundamental para el bien del país.

Y le quiero dar como dato concreto las últimas palabras del discurso que pronunció el presidente Kennedy en su exposición tres días antes de ser asesinado. Expresó que «los argentinos habían hecho muy bien» en anular los contratos de petróleo porque eso hacía a la dignidad de la Nación.

Nada más.

Sr. Frugoli. — No voy a entrar en la polémica, repito, aunque podría, con el mismo derecho, tal vez sin tanta elocuencia, considerar el tema desde otro punto de vista distinto del económico. Simplemente he expresado una opinión que creo no es improvisada. La sostengo sobre la base de algunos estudios del balance de pagos, de las cuentas nacionales y de ensayos y trabajos que se han hecho. Y lo hago con todo el respeto que corresponde.

Sr. Pugliese. — No tenemos ninguna duda, señor senador.

Sr. Frugoli. — Este es un ámbito donde se expresan con libertad las ideas, y cada uno sustenta la posición que le parece más justa. No he discutido nunca la facultad del ejercicio de la soberanía, que la descuento, sino que me he referido al problema desde el punto de vista económico, y su incidencia sobre el balance de pagos.

Voy a concluir refiriéndome a lo que me parece que es interesante que se sepa, aunque el señor senador Allende ya lo mencionó. Yo abundaría en ejemplos que ratifican lo que él ha señalado con respecto a que en este momento

está ocurriendo un fenómeno muy interesante respecto de las llamadas empresas multinacionales.

Pienso que las empresas multinacionales constituyen uno de los fenómenos económicos contemporáneos más importantes e implican una profunda transformación en la estructura económica del comercio internacional, que se caracterizaba tradicionalmente por la inmovilidad de los factores de producción y la movilidad de los productos. Estas empresas exportan los factores de producción, particularmente capital y tecnología, que generan, a su vez, productos que posteriormente se exportan.

Han logrado un poder que realmente impresiona y asusta. Galbraith —a quien citó el señor miembro informante—, en su libro *El nuevo estado industrial*, trae algunos ejemplos que ilustran con respecto a la potencia extraordinaria de las empresas multinacionales. Señala que el ingreso bruto de tres de estas empresas industriales, la General Motors, la Standard Oil y la Ford Motor, en el año 1965, superó el ingreso bruto conjunto de todos los establecimientos rurales de los Estados Unidos de América, y agrega que los ingresos de General Motors, solamente en 1963, fueron cincuenta veces los del estado de Nevada, ocho veces los del estado de Nueva York y algo menos de un quinto de los del gobierno federal de los Estados Unidos de América. Esto nos da una idea del gigantismo económico y financiero que significan estas empresas. Esta situación ha hecho que en el Senado de los Estados Unidos de América en este momento exista una comisión que las está investigando. Así mismo, las Naciones Unidas han resuelto que una comisión se ocupe de estudiar el fenómeno, porque, indudablemente, preocupa ya a todos los países del mundo este extraordinario poder económico-financiero que puede llegar a influir en las decisiones económicas y aun en el área política de muchos Estados, como ha ocurrido, y lamentablemente sucede hoy, en algunos países.

Además, las centrales sindicales de los Estados Unidos de América han hecho objeto de un duro ataque a las empresas multinacionales; las acusan de ser responsables del déficit crónico que viene padeciendo ese país en su balance de pagos desde el año 1969; dicen que ello es resultado de la exportación de capital, de tecnología, e incluso de empleo, que realizan estas empresas. En un viaje que realicé a los Estados Unidos de América, hace tres años, tuve oportunidad de conversar con dirigentes sindicales sobre este tema y comprobé que, ya en ese momento, estaban planeando llevar a cabo un serio reclamo para que se les impidiera exportar capitales, tecnología y empleos.

En Canadá también se está produciendo una reacción contraria a las empresas multinacionales. En cambio, en los países comunistas se las está recibiendo en condiciones sumamente favorables. Es decir que estas empresas no se

dirigen a los países comunistas porque se les ocurre, sino porque ellos les ofrecen condiciones de inversión altamente satisfactorias para sus intereses; es notable la corriente que en ese sentido se está produciendo, como lo señalaba el señor senador Allende, en todos los países detrás de la cortina de hierro.

Sr. Allende. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Frugoli. — Sí, señor senador.

Sr. Allende. — No quiero entrar, por cierto, tampoco en polémica alguna, pero como el señor senador ha tocado el tema de las empresas multinacionales y como país nos encontramos dentro de un proceso de integración regional a los fines de aprovechar el esfuerzo solidario recíproco, y no dominante, de la economía de escala, la expansión de nuestros productos a mayores mercados, quería hacerle notar que tanto en el libro de Galbraith, que usted ha señalado, como en el de Servant Schreiber y en algunos otros que se ocupan del tema —que son muchos—, se evidencia un fenómeno muy interesante para tenerlo presente, en cuanto a estas empresas multinacionales.

Cuando Europa sale de su última conflagración y a través de la claridad de visión de sus principales dirigentes supera la animosidad de la guerra y entra en el proceso de integración, se encuentra con que quienes primero aprovechan este proceso no son los europeos, sino las empresas multinacionales de raíz americana, y ello por dos circunstancias fundamentales: porque esas empresas habían logrado tener una experiencia propia en un mercado de escala suficiente que permitía en la dimensión de la empresa realizar la experiencia estructural, y habían creado el cuadro humano y la fuerza de autofinanciación que les permitía trasladarse a un mercado que en cuanto a capacidad de consumo y dimensión geográfica equivalía, la Europa unida, a Estados Unidos nación. Se encontraron, entonces —curiosa experiencia que es bueno no olvidar—, con que el proceso de integración, no suficientemente alertado en cuanto a las actitudes defensivas, aportaba el primer provecho para una mano extranjera y no para una vigorización propia. Ello provocó la reacción del presidente de Gaulle, al cual implícitamente cité en mi informe, en el sentido de poner en estado de alerta a la propia economía europea sobre cuál era el sentido de la presencia extranjera en su país.

En cuanto a otros aspectos a que han hecho referencia los señores senadores Frugoli y Pugliese, no hay ninguna pauta polémica, porque en el fondo todos convergemos hacia un propósito común frente a la inversión extranjera.

Pero quiero señalar esos tres aspectos fundamentales, quizás omitidos por obvios en mi informe. En primer lugar, esta no es una ley del temor a lo extranjero, sino de afirmación y confianza en nosotros mismos. En segundo

término, esta ley está tendiendo a la realidad de experiencias propias y extrañas y no puede legislar en detalle sobre todo el ámbito del complejo económico que directa o indirectamente se ve vinculado a la empresa extranjera, pero tiene ciertas pautas defensivas, como que apunta a la política industrial posible, que hace a la estructura de la empresa y que quiebra ciertas posibilidades de predominio indebido. Por lo pronto, se aparta del vacío jurídico evidente en la estructura actual de las sociedades de capital, al no permitir acciones al portador, al exigir acciones nominativas, al restringir su posibilidad de transferencia, al exigir la autorización previa, el registro, etcétera.

En segundo lugar, la ley prevé tres tipos de sociedades: las extranjeras, las de capital mixto y las de capital nacional; y, por consiguiente, está ahí toda la defensa posible, porque para el primer caso exige intervención del Congreso, por lo cual no puede darse la posibilidad de una inversión dañosa para el país sin la intervención de los representantes de la soberanía a través del poder político auténtico. Hago esta aclaración porque me parece conveniente a esta altura del debate, aunque no creo que haya sido refutada por los preopinantes.

Sr. Frugoli. — Deseo expresar al señor senador que cuando señalaba esas pautas no me refería al proyecto de ley sino a la política económica específica que deberá establecer, si no lo ha hecho ya, el gobierno nacional.

Con respecto al problema de las empresas multinacionales, es interesante conocer rápidamente algo de lo que está ocurriendo en el mundo, pues la Argentina no es una isla. En la Unión Soviética, por ejemplo, Fiat está construyendo el automóvil llamado Zhiguli; la empresa Pepsi-Cola también actúa en ese país; una fábrica de California produce teteras y cubiertos. También se han celebrado contratos multimillonarios con la Occidental Petroleum Company para exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, particularmente en el área de las islas Sakalin. ¡Y me estoy refiriendo a la Unión Soviética! Las condiciones en que se pacta son todas específicas, es decir referidas a cada caso en particular.

En Hungría están la Shell, la British Petroleum y Agip —empresa italiana que entre nosotros vende gas envasado—, que realizó contratos con Afor, empresa del Estado húngaro, para la instalación de cadenas de estaciones de servicio, es decir interviene en el manejo de los combustibles. Hay empresas y consorcios extranjeros que han ofrecido su participación al Estado en la construcción de carreteras.

El caso de Yugoslavia es realmente extraordinario. Como los señores senadores recuerdan, en el año 1948 aproximadamente rompe su dependencia con la Unión Soviética para oponerse a lo que llamaba «el capitalismo del Estado

soviético» e inicia un crecimiento independiente. Al 31 de diciembre de 1969 existen en Yugoslavia fábricas de nacionalidad italiana, alemana, inglesa, belga, francesa y sueca, en rubros tales como muebles y plásticos, automóviles, gráficos, tejidos y artículos de vestir, metalurgia, plomo, aluminio, generadores, petróleo, energía eléctrica, química y otros más.

Yugoslavia ha creado la «Compañía Nacional para las Inversiones en Yugoslavia», que tiene su sede en Londres, y los accionistas son, aparte del Estado yugoslavo, por cierto, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y 55 bancos de Yugoslavia, Europa occidental, Estados Unidos de América, Japón y Kuwait. En 1971, a través de ella, se invirtieron 160 millones de dólares en Yugoslavia.

Sr. Allende. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Frugoli. — Sí, señor senador.

Sr. Allende. — En la época del presidente Kennedy, y en un discurso lamentablemente muy poco reproducido —como todas las cosas que podían beneficiar a nuestra zona— por la prensa que respondía a las agencias noticiosas americanas, él dijo que cómo podían ellos, con jerarquía, pretender alentar el sistema democrático o aparecer como campeones de ese sistema, cuando a él le resultaba doloroso señalar que en un país de estructura socialista —como era Yugoslavia— había una inversión americana que equivalía al 75 por ciento de toda su inversión en la zona de Latinoamérica.

Además, es conveniente señalar que lo que usted dice, referente a la inversión extranjera en los países del área socialista, es cierto; pero simplemente es cierto porque el capital extranjero no tiene objetivos políticos, ideológicos, sino meros intereses económicos. Y no es que los países socialistas hayan hecho una reforma de las empresas o creado una empresa capitalista para el inversor extranjero y una empresa de tipo socialista para el capital nacional; son modos de inversión que, aunque no tengo el detalle al mínimo de cada uno de los países del área socialista, tengo entendido son simplemente una especie de compra de inversión, en la cual, mediante el contrato originario, se fijan pautas absolutamente rígidas y se deja un marco de utilidad que se paga sobre un precio determinado a esa inversión, que equivale a una especie de *royalty* del cual no se pueden apartar. Y como el capital extranjero donde no puede hacer negociados hace negocios, en esos países va y hace el negocio adecuado a su posibilidad.

Nosotros, lo que queremos advertir en esta ley es que en nuestro país los negociados terminaron y simplemente podrá hacerse un negocio normal.

Sr. Frugoli. — Yo no estoy haciendo valoraciones de carácter ideológico.

Sr. Allende. — En absoluto, pero me parece conveniente dejar hecha esa aclaración.

Sr. Frugoli. — Yo no he hecho valoraciones de carácter ideológico ni de carácter polémico. No he entrado a juzgar sobre las intenciones de los países socialistas o de las empresas multinacionales.

Quiero simplemente señalar un fenómeno que me parece interesante traer a la Cámara, porque nos ilustra sobre la situación del mundo en esta materia. Estamos viviendo en la época del «internacionalismo» y del «universalismo», y ésa es una realidad. De Manera que ése es el único propósito que persigo.

En cuanto a las condiciones, no son exactamente las que ha señalado el señor senador, porque en algunos países —como, por ejemplo, el caso concreto de Polonia— no existe límite para la remesa de utilidades al extranjero, y la tasa tributaria en Yugoslavia es apenas del 35 por ciento.

Sr. Allende. — No existe límite para la remesa de utilidades pero sí para la utilidad obtenible.

Sr. Frugoli. — No existe límite para la remesa de las utilidades obtenidas por la empresa en el desempeño de sus tareas económicas en el país receptor.

La presión tributaria en Yugoslavia es del 35 por ciento; en Rumania, del 30 por ciento. Incluso, en la Unión Soviética hay contratos que establecen que todo el utilaje industrial de la empresa inversora queda en el país a cambio del 50 por ciento del petróleo crudo. Es decir, varían las condiciones, pero no existe tal tremenda rigidez.

Por otra parte, en el caso de Rumania, por ejemplo, se dicta en noviembre de 1972 un decreto fijando las condiciones en las cuales ingresa la inversión extranjera. Es un decreto concebido en términos sumamente amplios, generales, que posibilita la negociación directa en cada caso particular. Observe el señor senador que ese decreto se sanciona en noviembre de 1972 y ya se ha firmado el primer convenio con una sociedad norteamericana para la producción de equipos y sistemas de computación electrónicos.

Está igualmente el caso de China continental, que en estos momentos está celebrando contratos con el Japón para la compra de equipos industriales, porque quiere modernizar su estructura industrial. Además, existen en China continental tres bancos extranjeros que funcionan por cierto de acuerdo a determinadas pautas.

Están los casos de Irán y del Perú. Este último país tiene un problema con la International Petroleum Company conocido por todos. Sin embargo, en este momento, en la zona del Amazonas peruano, está la Atlantic Richfield Company, la Phillips Petroleum Company, la Getty Oil Company, la Union Oil Company, la British Petroleum Company y otras más.

Con esto quiero señalar que el mundo se ha achicado y que existe una gran afluencia de

capitales que van y vienen de y hacia los distintos países.

Pero lo más significativo —y no voy a insistir más en el tema para no fatigar a la Cámara— es lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos de América, donde una de las profecías de Schreiber ha quedado desvirtuada, porque el flujo de capitales extranjeros se produce desde Europa hacia los Estados Unidos de América. Existe una cantidad de casos concretos que no quiero exponer en detalle para no demorar más el debate. Y hay algo notable: en el último trimestre, por primera vez desde 1969, la balanza de pagos de los Estados Unidos de América no ha sido deficitaria en razón del ingreso de esos capitales a los Estados Unidos de América.

Con esto lo único que quiero señalar es que, indudablemente, en el mundo hay un gran flujo de intercambio de capitales.

Para no dilatar más esta exposición, que se ha hecho mucho más larga de lo que yo imaginaba, deseo señalar que a mí me preocupa, como dije al principio, más que nada el modo como se aplique el estatuto legal, porque, indudablemente, con una misma ley se puede hacer mucho por el país, a favor o en contra, porque tiene un valor instrumental, es un poco como el bisturí que sirve a la vida o a la muerte, según la mano que lo maneja.

Pero lo que interesa que recuerden los señores senadores es lo que dijo el jefe del Movimiento Justicialista, hace muy pocos días, interrogado sobre el tema de las inversiones extranjeras: «El capital es lo más cobarde que existe; lo importante es darle garantías y seguridad para que se incorpore al proceso económico nacional.»

Nada más.

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.) — Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: la extensa y erudita exposición del señor senador Frugoli verdaderamente me refirma en la idea de todas las expectativas que se generan en torno a las llamadas inversiones extranjeras. Yo respeto mucho las opiniones siempre serias y bien analizadas del señor senador, pero debo decirle que en este caso particular no las comparto.

Se ha generalizado la creencia en algunos sectores de la población, no sólo en aquellos que se benefician con esta política de inversiones extranjeras sino también en algunos otros más neófitos en el tema, de que tras las inversiones siempre viene una corriente de beneficios para el país. La prensa ha jugado un rol muy importante en esta difusión de lo que a mi juicio es una falsa expectativa, y creo que siempre ha sido así.

Yo recuerdo, en vísperas de la sanción de la ley 14.780, cómo a través de los diarios los cables de las agencias internacionales difundían la

noticia de que una enorme afluencia inversionista estaba contenida en Estados Unidos de América a la espera de la sanción de la ley, y poco tiempo después, cuando ya la ley estaba sancionada, vi en las mismas publicaciones que se habían hecho eco de aquellas noticias de Wall Street, cómo nuevamente se volvía a afirmar que estos capitales aguardaban, no ya de la ley de inversiones extranjeras que existía, sino lo que después vimos que eran los convenios de garantía de inversión. Cuando dos o tres años más tarde, siendo presidente el doctor Guido, volví a observar que la prensa se hacía eco nuevamente de este caudal contenido, ansioso de venir a radicarse en el país, ya con la experiencia recogida me di cuenta de que algo raro se estaba tramitando, y no pasó mucho tiempo cuando observé que, efectivamente, se estaba gestando un nuevo convenio de garantías de inversión más levisó aún para la Argentina, el que poco tiempo después fue firmado y que por suerte, al no ser ratificado por el gobierno constitucional del doctor Illia, quedó sin efecto a fines de 1963.

En apoyo de esta tesis que propaga los beneficios de las inversiones extranjeras se han traído cifras de las más variadas. Hace pocos días leía en uno de los diarios grandes de la Capital que en el transcurso de la historia se han radicado en nuestro país entre 2.500 y 3.000 millones de dólares; y en esa publicación —a la que respeto, como es lógico— se agregaba que sólo el 5 o el 6 % de aquella cantidad había sido transferido a los países de origen. Pero no se aclaraba todo lo que había pagado el país en concepto de *royalties* y de tecnología, y es aquí precisamente donde está uno de los grandes factores de succión de nuestras riquezas.

A esas cifras nosotros podríamos contraponer otras, que adolecen de la relatividad de todas las estadísticas, pues no creo que en esta materia se pueda ser terminante, pero en los últimos diez años han ingresado al país 402 millones de dólares, mientras los pagos en el mismo período alcanzan a 1.370 millones de dólares. La fuente de esta estadística es una fuente responsable.

Aparte de lo que vengo señalando, no es menos cierto que existen presiones en torno al tratamiento de las leyes de inversiones extranjeras. Aquí tuvimos la prueba hace muy pocos días, cuando tomamos conocimiento de la actitud del señor Max V. Krebs, encargado de negocios de la embajada norteamericana, y de la nota que con fecha 23 de julio envió al señor ministro de Economía. No me extiende en la referencia puesto que este Senado se expidió condenando el proceder del señor Krebs, por unanimidad de todos los sectores, incluyendo el que integra el doctor Frugoli. Este cuerpo, más que la actuación personal del señor Krebs en la emergencia, condenó lo que ella representa como una penetración del imperialismo, que es un fenómeno con vigencia y no sólo una frase o una bandera de la demagogia, como algunos hacen creer.

Existe siempre en algunos sectores, entre los que me siento comprendido, el temor fundado a que detrás de las radicaciones de capitales extranjeros pueda venir alguna intervención. Sé que se puede sostener que tras esta posición haya posiblemente algún complejo de inferioridad, pero el argumento no es válido, porque el país tiene muchos ejemplos de que estas intervenciones se producen. Yo mismo he sido uno de los que lo denunciaron cuando se analizó el caso de la nulidad de los contratos petroleros que resolvió el doctor Illia. ¿Quién puede negar todas las presiones que existieron en torno al acto —a mi juicio de indiscutible defensa de nuestra soberanía— de anulación de aquellos contratos perniciosos? Digo esto con el mayor de los respetos, sin estar en mi ánimo adjetivar a quienes piensan lo contrario, porque, tratándose de hombres políticos, doy por descontado que aunque mantengan una posición contraria lo hacen en la creencia de que así proceden mejor en la defensa de los intereses nacionales.

Quiero recordar también que a veces se ha expresado, y en estos últimos tiempos con bastante frecuencia, al hacer el estudio de la proyección histórica de los capitales que han llegado a la Argentina, que ellos han hecho el país. Eso es relativamente cierto, porque no podemos negar que la mayoría de esos capitales, o buena parte de ellos, se incorporaron al país y no continuaron siendo capitales extranjeros, salvo algunos casos especiales, como el de los ferrocarriles. Estos trajeron beneficios para la República; pero también, como lo dijo bien el señor senador Allende, distorsionaron el proceso de nuestra geografía y aun de nuestras instituciones federalistas fortaleciendo al puerto de Buenos Aires, símbolo del centralismo porteño.

Si hacemos el análisis de la fenomenología del desequilibrio económico argentino, y en ese análisis mencionamos la influencia del aporte de capital extranjero, para ser objetivos no podemos menos que señalar el proceso de descapitalización que ha provocado el sistema colonial de nuestra economía, y esta descapitalización se refleja en algunos hechos que sucintamente se pueden reducir a los siguientes: una fuga de inteligencia científica y técnica, el drenaje del ahorro interno y el endeudamiento provocado, precisamente, para financiar el endeudamiento.

Esta descapitalización presenta tres tipos de fenómenos, que son: los pagos para reembolso de capital y de servicios financieros, que exceden las importaciones de capital, incluidas expresamente las reinversiones; la pérdida en la relación de precios entre la potencia hegemónica y el país de la periferia, que es el que recibe la inversión del capital extranjero; y la exportación del ahorro, que son las remesas al exterior que se hace de dinero o a veces, clandestinamente, de productos.

Volviendo a la relatividad de las cifras quisiera señalar que en el caso concreto de Amé-

rica latina, en el período de 1950 a 1961 entraron 9.600 millones de dólares y salieron remesas por valor de 13.400 millones, según una estadística que he leído en un libro de un brillante economista de quien tuve el honor de seguir uno de sus cursos en Ecuador, el colombiano Antonio García.

Yo soy de los que creen, señor presidente, que la base del desarrollo en nuestro país, al menos en este momento de nuestra historia, tiene que ser sin lugar a dudas el ahorro nacional, y esto lo quiero decir con cierto énfasis, tal vez más político que técnico, porque me parece necesario que los hombres políticos destruyamos la versión también política, de la que suele hacerse eco la prensa con barnices de tecnicismo, que reduce todas las esperanzas del desarrollo nacional a un supuesto aporte del capital extranjero.

El financiamiento de nuestro desarrollo sale del ahorro interno; ésta es una realidad en la Argentina. Más del 95 por ciento de la inversión bruta realizada en la última década tiene esta fuente del ahorro interno. No hay xenofobia en la posición que acabo de expresar. Simplemente creo ser realista. Pienso, eso sí, que nuestro ahorro debe concentrarse y orientarse para cumplir el fin superior, que es el del desarrollo sin dependencia.

El capital externo es sólo un complemento necesario, a nuestro juicio, para la incorporación de tecnología, maquinaria y métodos que el país necesita. Pero sólo es un complemento. No podemos permitir que aprovechando la necesidad que tiene el país de tecnología se la utilice como pantalla para que los intereses imperialistas succionen nuestros propios recursos o manejen a su arbitrio los resortes vitales de la economía y del crecimiento nacional.

No es una cosa ignorada para nadie que el capital, con su perfeccionamiento y afianzamiento a través de los años, se convierte en centro de poder que es tan extenso que llega hasta dominar en alguna forma el consumo interno de un país. Por eso nosotros consideramos que hay que regular las inversiones extranjeras.

Existen en la materia dos tipos de leyes: de fomento y de regulación. El proyecto que tenemos en análisis es precisamente de regulación de las inversiones extranjeras y por eso, como lo ha expresado el señor senador Pugliese, nos parece un proyecto bueno en líneas generales. Yo quiero ir más allá de lo que él ha dicho, interpretando inclusive su pensamiento y el de todos los demás colegas de mi bloque.

Si este no fuera un proyecto de regulación y, por el contrario, tendiera a fomentar en este momento cronológico de nuestro país, de la vida nacional, las inversiones extranjeras, nosotros no titubearíamos en votar en contra.

Se ha mencionado como antecedente de la ley en examen la 14.222. El señor senador Frugoli expresó acertadamente que fue una buena ley también en su momento. Pero a nadie se le

oculta, ni a los que han redactado el mensaje del Poder Ejecutivo, que los momentos son diferentes.

El desarrollo del capitalismo después de la guerra ha producido, o por lo menos afianzado enormemente, la concentración de capitales. Celso Furtado, en su libro *El poder económico de Estados Unidos y América latina*, destaca el grado de concentración que tiene actualmente el capitalismo norteamericano. Los grupos económicos articularon las diversas etapas de un proceso productivo, y si bien Furtado indica que este proceso de concentración nace a fines del siglo pasado, destaca que el gran desarrollo de concentración ha ocurrido después de la posguerra. Da esta cifra: en 1962, las veinte mayores sociedades anónimas manufactureras de Estados Unidos de América tenían un activo similar a las 419.000 sociedades restantes, también manufactureras, de aquel país.

En América latina hay dos regulaciones predominantes en materia de inversiones extranjeras. Una de ellas es la decisión número 24. No la voy a analizar en detalle, aunque la tengo aquí, sobre mi banca. Esta decisión la aprueba la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y establece las reglas comunes para la inversión externa que estén en consonancia con las nuevas condiciones creadas por el mencionado acuerdo.

Entre las declaraciones, que son muchas y muy interesantes, destaco la número 4, en donde dice que el tratamiento de los capitales extranjeros no puede ser discriminatorio en contra de los inversionistas nacionales. Pero la realidad de este Acuerdo de Cartagena y de su decisión número 24, en particular, también es diferente de la situación argentina, pues en él se tendía a transformar en empresas nacionales o mixtas a las extranjeras ya radicadas en la zona del Pacto Andino, precisamente para que no se beneficiasen con las ventajas que derivaban del Acuerdo de Cartagena.

De todas maneras, reconozco que es un buen antecedente y me felicito que quienes han redactado el mensaje del Poder Ejecutivo hayan apelado a él.

Sin duda, es muchísimo mejor antecedente —el polo opuesto, diría— que la ley brasileña 4.131, modificada por la 4.390, que también tengo sobre mi banca, y que voy a pasar por alto en homenaje a la hora y al tiempo que nos lleva este debate.

Sr. Frugoli. — ¿Me permite una breve interrupción, señor senador?

Yo no quise mencionar la decisión 24 del Acuerdo de Cartagena para no extender la exposición, y me felicito que lo haya hecho el señor senador. Ahora, creo que hay que destacar —y de alguna manera también lo ha señalado— que las condiciones, el substrato fáctico, es distinto, y los objetivos que se persiguen con la

decisión número 24 son diferentes de los que se persiguen con la sanción de nuestro proyecto de ley.

Allí se trata de crear un mercado suficientemente amplio como para hacer inversiones extranjeras y, además, se fijan condiciones muy precisas para evitar una guerra de incentivos entre los países signatarios del acuerdo, con respecto a la captación de la inversión extranjera. Porque de esa manera se trata de evitar que se produzcan lo que se llaman «bolsones de subdesarrollo», que es un poco lo que está ocurriendo en Bolivia, que ha denunciado ya esta situación ante la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Además, las condiciones más o menos rígidas del acuerdo de la decisión número 24 se ven compensadas para el capital extranjero por la amplitud del mercado.

Y ahora voy a señalar algo que no sé qué valor puede tener, pero que a mí, de alguna manera, me interesó escuchar. Hace pocos días estuvo en Buenos Aires el economista Guerrero, que integra la Junta del Acuerdo de Cartagena, y en su opinión el acuerdo está en vigencia en Chile y en Perú. Pero en el primer país no hay inversión privada, ni interna ni externa, por la situación política tan grave que está viviendo.

En el Perú tampoco, por una ley de organización industrial —no recuerdo exactamente el nombre en este momento—, en virtud de la cual el paquete accionario de las empresas debe pasar a manos de los obreros en un lapso determinado, lo que los ha desalentado, salvo en el área del petróleo, donde se introdujeron las inversiones que señalé hace un momento y que, además, son de alta rentabilidad.

En el Ecuador sí ha habido alguna inversión, pero siempre en el área del petróleo, que es la más rentable. Pero como en ese país hay mercado libre, no se sabe el monto de las divisas que entran y de las que salen, de modo que es difícil determinar hasta qué punto esta renta les resulta. En Colombia, hasta hace muy poco, se había planteado la inconstitucionalidad, que ha sido resuelta en contra del planteo por los superiores tribunales de justicia. Es decir que las condiciones son absolutamente distintas. Y si se analiza el proyecto argentino y la decisión número 24, se podrá advertir que en algunos aspectos, por ejemplo el área en donde no se pueden hacer inversiones, la situación de esa decisión es mucho más flexible que la del proyecto argentino. Lo mismo ocurre con lo que señalé en cuanto a las radicaciones extranjeras anteriores a la sanción de la ley 14.222.

Sr. Solari Yrigoyen. — Lo he escuchado con toda atención al señor senador Frugoli, como siempre, y me excusaré si no manifiesto mi punto de vista contrario a algunos de los aspectos que ha señalado, para no desviarnos del tema. Porque si no tendría que decirle, por ejemplo, que uno de los puntos negativos de la re-

volución peruana es precisamente su política petrolera. Y tendría que decirle también que en el Ecuador el problema de la radicación —si así se le puede llamar, y que yo calificaría de penetración imperialista del petróleo— es bastante anterior al Acuerdo de Cartagena.

Ya en el año 1964, cuando estaba la Junta Militar del almirante Castro Guijón, comenzaron a caer estos supuestos inversionistas y provocaron —a mi juicio, claro está— diversas situaciones y cambios de gobierno que tuvieron una decisiva influencia en los últimos años de la vida política del Ecuador.

Sr. Frugoli. — Creo que coincidimos, señor senador. No sé si me habré expresado mal; es más, dije que en el Ecuador no se podía saber el registro. Además, coincido con usted que son inversiones de alta rentabilidad y no conozco resultados positivos que le pueden proporcionar a los países receptores.

Sr. Solari Yrigoyen. — Sintetizo diciendo que a pesar de tratarse de situaciones distintas, hay una filosofía en la decisión número 24 del Acuerdo de Cartagena, que ha sido bien rescatada por este proyecto en examen. Y esa filosofía es, precisamente, la del punto 4, que me permitió citar con anterioridad a esta feliz interrupción del señor senador.

No voy a hacer la exégesis de este proyecto, señor presidente. Me hubiera gustado efectuarla, lo digo con toda franqueza. Lo tengo hecho y resumido en comparación con otros modelos que vengo citando: el Acuerdo de Cartagena y la ley brasilera, y también la venezolana y la mexicana. Pero me parece que sería abundar y fatigar demasiado a esta Cámara al filo de la medianoche.

Pero sí quiero decir, pasando por alto diversas observaciones particulares que podría formular a esta iniciativa y que ya mencionó perfectamente el señor senador Pugliese, que nosotros pensamos que en el artículo 6º de las prohibiciones —el más importante de este proyecto— están incluidos los hidrocarburos y los minerales radiactivos en general, tanto el uranio, que sabemos existe en el país, como el titanio, que yo al menos no podría afirmar su existencia.

Tampoco me voy a referir al punto 7 del inciso c) del mismo artículo sexto de las prohibiciones, en cuanto a que las actividades del campo debieran estar totalmente excluidas, sin la salvedad que se hace, porque ya lo aclaró bien el señor senador Pugliese: no se justifica la radicación extranjera agrícola-ganadera por más que incorpore alguna tecnología nueva.

Pero como él anunció que yo me referiría al punto 8 del mismo inciso de las prohibiciones, sí me detendré en este tema antes de terminar mi exposición.

Está muy bien prohibida la radicación de capitales extranjeros en el rubro pesca. Pero

pienso, señor presidente, que la prohibición tiene que ser total.

Le voy a rogar al señor miembro informante de la comisión, el señor senador Allende, que trate de seguirme en la argumentación que quiero hacer, porque la considero verdaderamente importante. Y así tal vez podamos lograr en esto una modificación que, a nuestro juicio, beneficiaría al país por sus alcances.

Este tema de la pesca es importantísimo para la República. Nuestro partido lo ha reivindicado desde hace mucho; así podría indicar, por ejemplo, que una de las obras más serias en materia del desarrollo pesquero ha sido el convenio que se celebró en 1965 con la FAO.

Hasta entonces hablábamos mucho de las posibilidades pesqueras, sobre todo del sur argentino, de lo que hoy se llama la zona pesquera 2, al sur del río Colorado; pero cuando en aquel entonces probamos de efectuar alguna explotación mediante el régimen de empresas mixtas, recorrimos todos los antecedentes habidos en los despachos oficiales y observamos que había si estudios relacionados con las variedades de peces, no conociéndose bien en la Argentina cuáles eran las posibilidades pesqueras del mar austral argentino, computadas en años completos. Esto recién se encaró en el convenio con la FAO, organismo que está realizando una carta de pesca de una duración de diez años, pero con cuyo informe preliminar correspondiente al primer trienio ya se están manejando los industriales pesqueros argentinos, e incluso ha provocado un notorio desarrollo en el último bienio de la actividad de la que nos estamos ocupando.

Es bien sabido que los radicales hemos propiciado que el país sancionara una ley en beneficio de la exclusividad de las 200 millas de la costa y nos amoldamos a este límite porque existe un acuerdo internacional en ese sentido; pero reivindicamos mucho más de esa distancia, porque seguimos la tradición histórica, particularmente de los últimos años, de defender lo que se llama el mar epicontinental argentino.

Es por eso —el señor senador Luder lo ha de tener presente— que hemos presentado en este período parlamentario un proyecto sobre las 200 millas, que se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores, que él preside, y esperamos poder tratarlo antes de la finalización del período ordinario de sesiones, porque el mismo constituye una defensa integral de las 200 millas y de todos los recursos que se encuentran dentro de ellas.

Nuestro programa partidario habla de la defensa y aprovechamiento de la plataforma continental y del mar epicontinental argentino. Esta filosofía que defendemos los radicales, pero que trasciende —debo confesarlo— nuestro espíritu partidista, y estoy seguro interpreta también el pensamiento de los miembros de los distintos bloques componentes de esta Cámara, ha sido bien sintetizada, lo digo con toda honestidad,

en la llamada ley 20.136, que estableció, conforme a nuestra ideología, que los recursos vivos existentes en las zonas marítimas bajo soberanía argentina son propiedad del Estado nacional, el que podrá conceder su explotación; pero, agrega la ley en su artículo 2º, estos recursos sólo podrán ser explotados por embarcaciones con pabellón argentino y previo permiso otorgado por la autoridad competente.

Queremos asegurar que la extracción, industrialización y comercialización de los productos de la pesca se realice a través de los buques y empresas nacionales. El canon que pagaban los barcos de bandera foránea no tiene importancia si lo que verdaderamente nos proponemos es reivindicar las riquezas pesqueras para nuestro país, no con un sentido exclusivo estatista como finalmente lo ha tratado la república hermana del Perú, sino guiados por la defensa de la inversión nacional, tanto privada como pública.

La capacidad de captura de la flota argentina está en aumento. Puede decirse —lo sé— que no es suficiente; inclusive para nuestros propios propósitos deseáramos que la producción pesquera anual, que se encuentra en las 230 mil toneladas, la pudiéramos llevar en un año a 500 mil toneladas. Pero este deseo en alguna medida se ve frenado porque, de acuerdo con los barcos existentes y los que este año entrarán en funcionamiento, la captación pesquera no podrá pasar de las 370 mil toneladas. Ese no es un índice desalentador, porque la expansión es muy grande, y lo saben todos los que giran en torno a este negocio. Tanto la parte naviera como la pesquera y la industrializadora están viviendo un período de realce económico en la Argentina, motivado principalmente por los altos precios internacionales y también por una buena legislación, que se ha sumado a la que se viene dictando y perfeccionando, precisamente, desde que la Argentina celebró aquel convenio con la FAO.

Si nosotros impugnamos este punto octavo no es porque prohíba la radicación extranjera para la pesca, lo que nos halaga, sino porque al mismo tiempo abre una peligrosa puerta cuando dice: «...excepto cuando posibilite el ingreso de la producción a mercados internacionales cerrados». Esta norma no tiene antecedentes en el Acuerdo de Cartagena ni tampoco en la ley brasileña. Esta, en sus artículos 50 y 51, prohíbe exclusivamente las radicaciones derivadas de la banca y la financiación. Pero quiero destacar que, si bien la ley brasileña que he citado como modelo negativo en la materia establece prohibiciones muy restringidas, no podemos dejar de tener en cuenta que en ese país hay otras leyes que disponen diversas prohibiciones, y entre ellas está la de la pesca. Hay reglamentos especiales que reservan para el Estado brasileño la extracción de hidrocarburos y su refinación, los ferrocarriles y los teléfonos. Otras leyes, como lo he indicado, lo hacen con las ac-

tividades pesqueras, de radio, televisión, seguros y las firmas de ingeniería. En otros casos también por normas especiales se limita la participación del capital extranjero, como las compañías de aeronavegación, en las cuales se necesita un mínimo del 30 % de capital nacional.

Pero, qué paradoja, señor presidente: a pesar de esta orientación abierta que para nosotros es la antipolítica en materia de inversiones extranjeras, el Brasil establece una limitación y preserva íntegramente la pesca para sí, sin excepciones. Sin embargo, a los pocos días de haber sancionado nosotros la llamada ley 20.136, empieza una vez más la guerra de cables de las agencias internacionales. En aquel entonces yo recorté uno que he guardado en mis archivos y que provenía precisamente de Brasilia. Allí se decía que Brasil propiciaba la formación de empresas mixtas argentino-brasilenas de pesca, pensando que ésa sería la solución para superar el «grave problema» provocado por la prohibición argentina para la pesca brasileña —aclaro que la prohibición no era exclusivamente para el Brasil sino total—, y como consecuencia del cual las compañías de aquel país aumentarían la capacidad ociosa de pesca en un setenta por ciento.

Es curioso que quienes reservan para sí las aguas de su propio país, cuando la Argentina adoptó una medida similar con algún retraso se hayan inclinado a pensar que a nosotros nos convenían las sociedades mixtas. Aquí sí puede operar el capital extranjero, pero no en sus aguas.

Yo me temo que, en definitiva, esta puerta que abre el apartado 8 con su redacción, esté destinada a uno o dos países exclusivamente.

Nadie mejor que los propios interesados, los armadores, en rectificar esta posición que ahora recoge la redacción de este punto.

«La Nación», ya hace bastante tiempo, con anterioridad a la asunción del mando por las autoridades constitucionales, recogía la opinión de los armadores frente a ofensivas del Brasil como las que acabo de reseñar y otras que también podría agregar con otros antecedentes, como el caso de España, para que la Argentina abriera la puerta a los capitales extranjeros.

Decían entonces los armadores, en «La Nación» del 26 de marzo de 1973: «Por eso no debe extrañar que organizaciones pesqueras de países tradicionales y competidores, con extensas redes comerciales, buques, etcétera, ahora que los recursos escasean en sus caladeros y que se les ha prohibido pescar en los nuestros, se ofrezcan para radicarse y ampliar rápidamente la oferta a fin de atender sus mercados en forma más conveniente para ellos y no para nuestro país. Recuerdan los armadores que en 1967 y 1968, cuando nuestros productores malvendían sus capturas por falta de demanda y no se podía exportar, esas organizaciones no ofrecieron sus

clientes para impulsar el desarrollo argentino. Ahora —añaden— quieren aprovechar los recursos argentinos para seguir impulsando su desarrollo comercial.

»Es decir que esos países buscan comprar en forma más ventajosa. Harán inversiones que se pagarán con lo que ahorren en los precios y, consecuentemente, pertenecerán al capital extranjero. En cambio, subráyase, las inversiones que realizan ahora los empresarios nacionales se pagan con lo que se gana en los precios a costa del exterior y pertenecen al capital argentino, que no gira dividendos ni depende de directivas ni intereses extraños.»

Si nosotros abrimos esta puerta se daría, entre otras consecuencias malsanas, el caso del giro de dividendos, de lo que se quejaban los armadores como posible aun antes de que todo esto estuviera en tela de discusión.

Una última crítica quiero hacer, señor presidente, y vuelvo a insistir en que tal vez la comisión pueda recoger nuestra inquietud reformando el despacho.

Obsérvese que bastaría cerrar un mercado para lograr las radicaciones que rompen el principio de la exclusividad. Por ejemplo, el Brasil cierra su mercado para nosotros. Ya con eso las empresas brasileñas que quisieran radicarse en la Argentina, encuadrarían en la ley cuando ésta dice que la prohibición no existirá cuando la radicación: «...posibilite el ingreso de la producción a mercados internacionales cerrados».

Es decir que el cierre del mercado sería un pretexto, así la radicación se encuadra en nuestra ley, y una vez que ello ocurre vienen aquí y nos dicen: «Nosotros trabajamos como inversores extranjeros y posibilitamos que la producción argentina abra el mercado cerrado de nuestro país». Lo mismo podría expresarse de los soviéticos o de los españoles, por citar algunos otros ejemplos.

Decididamente, creo que el punto que critico se aparta del espíritu de la ley. Estamos derogando, inclusive, la 20.136. Para nosotros sería una verdadera garantía que modificáramos el punto 8 y que estableciéramos entre las prohibiciones la pesca, a secas. El punto 8 empezaría diciendo «pesca», y después irían los agregados que se le han hecho en el dictamen referidos a otros temas.

Concluyo, señor presidente, destacando que, por encima de las diferencias que hemos señalado tanto el señor senador Pugliese como el que habla, en nombre de nuestro bloque, esta ley en examen afirma el sentido nacional. Le damos nuestro voto en general porque él constituye el apoyo a este sentido nacional y creemos que al proceder así estamos todos interpretando una doctrina común que tenemos los argentinos, que es liberadora y transformadora de nuestras estructuras.

Además, señor presidente, sin perjuicio de disentir nosotros en aspectos fundamentales con

el Acuerdo Social, vamos a votar favorablemente este proyecto, porque él se consubstancia con la doctrina liberadora que menciono, y lo haremos como una afirmación categórica del sentir nacional.

Nada más. (*¡Muy bien!*)

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente y señores senadores: coincido con el señalamiento que el señor senador doctor Allende le ha dado al contenido y espíritu de este estatuto que puede ser trascendente para la República. No surge de las exposiciones que se han escuchado ningún espíritu de hostilidad ni de «recelo» hacia el capital extranjero. Pero sí existe el «celo», la preocupación y la inquietud nacional para que el país tenga un instrumento defensor de sus riquezas claves, que hacen a la supervivencia económica de la República.

Es evidente que nadie puede pretender a través de este instrumento —y ése es el espíritu de nuestra sanción—, el sometimiento del país a ninguna área determinada. La Nación no es una autarquía, ha dicho el señor senador doctor Allende. Efectivamente, coincido con su argumento. Afirmando también que el país no es una factoría, no es tierra de nadie ni es un país en venta o en liquidación, y que la experiencia de los tiempos ha demostrado que una de las tareas vitales de este período de reconstrucción es vencer la psicosis de nuestra supuesta incapacidad para regir destinos tan trascendentes como, por ejemplo, la utilización del ahorro nacional para la solución de los grandes problemas argentinos.

Coincido con el señor senador Pugliese en que se trata de un buen proyecto, de una iniciativa que mejora las dictadas hasta la fecha, sin que ello implique dejar de insistir con las críticas que hemos formulado y vamos a formular, y sin perjuicio de la mejor estructuración que pudo haber tenido un proyecto de esta naturaleza.

Es evidente, señor presidente, que en lo referente a esta materia nuestro partido ha fijado claramente como punto básico la promoción del ahorro nacional, alentando su inversión hacia los sectores que más interesan al desarrollo económico. Su propósito es eliminar las interferencias monopólicas nacionales y extranjeras en el proceso argentino, de modo de lograr un normal desenvolvimiento de la economía.

A esta altura de los acontecimientos y de la experiencia que han vivido el país y América latina, no se pueden desconocer los efectos funestos de los monopolios, de los *trusts*, de los carteles y de las empresas multinacionales con respecto a las naciones en vías de desarrollo. América latina ha sido objetivo concreto de la acción de esas empresas multinacionales, y por la

experiencia de otros países no podemos creer que ellas, que actúan concertadas y no enfrentadas, vengán al país con características de operatividad distintas a las que les son propias.

Esta materia se rige por la coincidencia de La Hora del Pueblo del 20 de julio de 1972, que dice concretamente que «Se proveerá a la sanción de una nueva ley de radicación de capitales extranjeros tendientes a orientarlos de acuerdo con las prioridades fijadas en el plan de desarrollo y conforme a requisitos compatibles con el mismo».

Lógicamente hubiéramos preferido, como lo señaló muy bien el señor senador Pugliese, que este estatuto estuviera unido o mancomunado a un «plan de desarrollo», pero tenemos que creer que se podrá realizar esa tarea simultánea que preveía la coincidencia de La Hora del Pueblo. En la coincidencia de los partidos se establece que se proveerá a «la sanción de una nueva ley de radicación de capitales extranjeros de acuerdo con las prioridades y demás objetivos fijados en el plan de gobierno» —o sea en el plan de desarrollo—, y agrega «conforme a los requisitos compatibles con este programa específico en lo que atañe a preservar la independencia de decisión nacional».

En nuestro programa de la Unión Cívica Radical se propugna concretamente «legislar sobre radicación de capitales externos en cuanto complementen el esfuerzo nacional, propiciando la elaboración de un régimen de inversiones extranjeras con sentido selectivo, que determine áreas de inversión, las condiciones y porcentajes de participación, la obligación de incorporar equipos y tecnologías aptos para la dimensión del mercado argentino, la forma de remitir fondos al exterior, el término de la repatriación de la inversión y el saldo positivo que la misma produzca a la economía nacional».

Debo señalar con toda lealtad que este proyecto de ley se ajusta a las coincidencias programáticas en sus aspectos substanciales, de la misma manera que en otros casos hemos señalado nuestra profunda discrepancia con los proyectos económicos del Poder Ejecutivo.

En este sentido, a través de la exposición de los señores senadores, y muy especialmente la del señor senador Frugoli, he de destacar un aspecto que no debe estar ausente en este debate. Lo hizo muy bien el doctor Allende, pero creo que hay que insistir sobre este tema: ¿qué son, qué representan estas empresas multinacionales? ¿Cuál es su influencia? ¿Cuál es su acción? ¿Hasta dónde llegan? ¿De qué manera se manejan; cómo se complementan y se compenetran para introducirse decisivamente en la vida de las naciones?

Tengo sobre mi banca un informe del secretario de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Química, Charles Levinson, publicado en 1972, señalando fundamentos

y conclusiones que son fundamentales y que yo quiero producir en esta oportunidad a través de todo el curso de mi exposición.

Es solamente ahora, dice, que se empiezan a observar los grandes cambios aportados a la economía mundial por medio del desarrollo de las grandes empresas multinacionales. Los conceptos y medios de acción de los gobiernos y de los sindicatos cuentan al menos veinte o treinta años de retraso en comparación a este fenómeno. Y señala que es esencial valorar la manera cómo actúan estas empresas multinacionales en las realidades económicas en las cuales hace alusión y de qué modo escapan al control de los Estados.

Baste con mirar, dice este autor, de qué manera se cerca el funcionamiento del nuevo circuito económico organizado a escala mundial por los gigantes de la industria y de los bancos, para darnos cuenta de que el Estado nación se ha convertido en algo impotente y anacrónico, incluso cuando sus dirigentes no son, simplemente, los representantes o los hombres de paja de esas potencias internacionales.

¿Cuál es el valor, la dimensión de estas empresas multinacionales, que actúan hoy con una modernización de sus métodos, de su penetración y de su compenetración armónica entre sí?

Se ha sostenido que en 1985 entre doscientas y trescientas empresas multinacionales controlarán el ochenta por ciento de la producción occidental.

Las inversiones americanas en el mundo han más que doblado los últimos diez años. Inversamente, se ha observado un movimiento de inversiones de compañías extranjeras en los Estados Unidos de América, y, según las previsiones actuales, la implantación de capital europeo en América del Norte será también uno de los fenómenos espectaculares de este decenio.

Se ha llegado a situaciones tales —surge entre las conclusiones citadas— que las grandes compañías emplean a más personal en el extranjero que en sus propios países de origen. Por ejemplo, se cita que el gigante farmacéutico Ciba-Geigy ocupa solamente un quinto de su mano de obra total en Suiza.

Las compañías multinacionales —como se puntualiza— son verdaderas potencias internacionales. Sus cifras totales de venta sobrepasan con frecuencia el producto bruto nacional de los Estados nacionales con los cuales se relacionan. El director financiero de esta firma es con frecuencia mucho más poderoso que numerosos ministros de finanzas de muchos países. Así es que está demostrado en el estudio mencionado que las ventas de las filiales extranjeras en diferentes países representan más del doble de las exportaciones mundiales totales. Las filiales de empresas americanas en el extranjero producen y venden más que la totalidad de las exportaciones americanas.

Esa experiencia señala, además, en lo que se refiere a productos manufacturados, que el sesenta por ciento de las exportaciones no son otra cosa que un traslado de empresas y sucursales en el extranjero. Practican, naturalmente, la política de los «precios de traslado» de una sucursal a otra, procurando que el máximo de beneficios sea obtenido en un país donde los impuestos son poco elevados y el mínimo en los países donde la fiscalidad es la más elevada.

Es decir, señor presidente, que esos estudios y esa experiencia enseñan que hay una técnica y una organicidad para hacer la penetración, y lo que ahora se caracteriza como la compenetración armónica de las empresas multinacionales, que no podemos ignorar.

Esta ley tiene dos objetivos, y estoy seguro que coincidirá conmigo el señor miembro informante. Primero, abre las puertas a capitales extranjeros en áreas determinadas. No los acosa ni los niega. En segundo lugar, preserva los fueros del país en bienes económicos que son esenciales y que además hacen a la soberanía de la República.

Son dos objetivos concretos que no podemos negar ni podemos disminuir en su trascendencia en la hora actual.

La dispersión de las filiales permite en todo momento utilizar, de la mejor manera posible, la situación en cualquier región del mundo. La producción de estas empresas multinacionales se efectúa en un país, las ventas en otro y los impuestos son pagados en un tercero. Es una experiencia incuestionable, y así se señala en el informe citado. Se ha dicho que, en este proceso de mundialización, las exportaciones —sobre las cuales se continúa poniendo acento a nivel nacional— han pasado a ser factor secundario. Actualmente, los europeos invierten en Norteamérica, los japoneses en Europa y los Estados Unidos de América, pero eso no quita que las empresas multinacionales quieran realizar su política de penetración imperialista, que no proviene de un área determinada, y que nosotros estemos por encima de cualquier régimen imperialista político o económico, cualquiera que sea el área en que esté ubicado.

Además, señor presidente, es necesario destacar que estos gigantes que nosotros señalamos, no como muestra de enemistad con el esfuerzo extranjero sino en defensa de lo propio, están alejados de todo concepto de idealidad. Se ha dicho que no les interesan los conceptos tales como los derechos civiles, libertades individuales o justicia social. El «manager» de estas empresas multinacionales es demócrata en Suiza, fascista en España o Portugal, comunista en la URSS o racista en África del Sur.

Es decir, tienen una expansión y espíritu de dominación que es necesario señalar en este debate en forma incuestionable, advirtiendo el peligro en la República.

Las empresas multinacionales —quiero destacar esta conclusión— no son rivales entre ellas, aunque se pudiera así imaginar. Sin embargo, se «interpenetran», se lanzan juntas en aventuras que permiten dividir los riesgos y los beneficios.

Esta referencia —conclusiones y advertencias que he hecho con respecto a las empresas multinacionales, señaladas también por otros oradores que me precedieron en el uso de la palabra— tiene por objeto darle a este debate también la marcación doctrinaria y trascendente de los peligros que representan estos gigantes de la economía mundial.

La Argentina no ha escapado en los últimos años a este fenómeno mundial. La penetración del capital extranjero tuvo un origen determinado especialmente por Gran Bretaña con respecto a los ferrocarriles. Ha cambiado de signo. Pero siempre las empresas multinacionales actúan con ese concepto de interpenetración que hemos señalado.

Las empresas multinacionales se radican hoy fundamentalmente en la industria y en el medio financiero, rubros que más les interesan. Cuando lo hacen en la industria, se ha observado que se dirigen preferentemente a los medios de transporte, industria automotriz y ferroviaria, materiales de comunicaciones, industria química básica, amparándose en regímenes de radicaciones que consagran oficialmente un monopolio de provisión exclusivo, con cierre simultáneo de la importación.

Es decir, en razón del dominio de la tecnología que acompaña a estos procesos industriales, se radican en sectores claves y estratégicos del desarrollo fabril al convertirse, como en el caso de la industria química, en exclusivos proveedores de múltiples empresas nacionales elaboradoras, cuando no en únicos representantes importadores de su casa del exterior, si faltan las importaciones necesarias para complementar el consumo.

Nosotros hemos tenido en el país sucesivos regímenes legales. Así, el sistema de la atracción, que se condensa a través de las leyes 14.222, de 1953, y 14.780, de 1958. En esas oportunidades intervine en los debates realizados en la Honorable Cámara de Diputados. Allí fijé mi posición, que hoy ratifico, en el sentido de que manera no somos enemigos del capital extranjero, pero tampoco queremos serlo de la República.

Es decir, cuáles son las áreas donde puede actuar el capital extranjero y dónde le está vedado participar, y dónde es obligación inherente al Estado argentino hacer funcionar con su propio esfuerzo, con el ahorro y aporte nacionales, la realización creadora.

En ese sentido, hoy se cambia, entiendo, por el espíritu y el texto de este proyecto de ley, el concepto de «atracción», para involucrarlo en

la idea concreta del «control», y yo le agregaría de la «orientación», que es la doctrina imperante —según mi modesta opinión— en este proyecto.

Debemos tener en cuenta que en los últimos siete años la estructura financiera externa provocó y determinó —afectando seriamente el interés nacional— un grave proceso de extranjerización de ciertas industrias, tales como la de cigarrillos, por ejemplo, y algunos bancos, basamento financiero necesario para dotar de fondos a las radicaciones estatales.

Quiero leer algunas cifras oficiales. Conforme al régimen de la ley 14.780, de 1960 a 1972, se observan las siguientes radicaciones: en el período 1960/61, radicaciones por 245 millones de dólares; en 1962/63, 119 millones de dólares; en 1964/65, 40 millones de dólares, y en 1966/72, 129 millones de dólares.

¿Pero qué ocurre, señor presidente? Frente a estos ingresos, se observan, en cambio, los siguientes egresos netos «provenientes de inversiones» en la balanza de pagos, según las cifras del Banco Central: en 1962/63, los egresos fueron de 141 millones de dólares; en 1964/65, 192 millones de dólares; en 1966/72, 1.655 millones de dólares.

Es decir, que durante el período 1966/1973, del régimen militar, solamente hubo radicaciones por 129 millones de dólares y, en cambio, las salidas netas por inversiones fueron de 1.655 millones de dólares. Algo así como trece veces las sumas recibidas.

Aquí está la demostración cabal de qué manera se extranjerizó la economía del país y se ha afectado el interés nacional. Según datos concretos, las inversiones de capital norteamericano en la Argentina fueron de 660 millones de dólares en 1961, y en 1969 ya llegaban a 1.244 millones de dólares.

Estas cifras y enseñanzas demuestran de qué manera se ha manejado este procedimiento y cómo el gobierno actual tiene que aprovechar la experiencia para dar cumplimiento a esta ley. Y, si es necesario, proveer a una ley especial que contemple prohibiciones determinadas en materias como hidrocarburos, como lo hemos propuesto y lo proponemos para el artículo 6º, y material crítico, como el uranio, porque hace a cuestiones básicas de nuestra soberanía.

Durante nuestro gobierno en 1963-1966 tuvimos —y fui testigo directo— que recibir los embates de una acción extranjera nefasta y persistente, que lamentablemente tenía sectores de afuera e internos que la servían.

Antes de la anulación de los contratos de petróleo, que aquí se ha invocado, el señor presidente, doctor Illia, recibió, nada más ni nada menos, que la visita de Averell Harriman, el gran tramitador con la Rusia soviética, en una gestión tendiente a evitar la anulación de los contratos de petróleo. Y quiero señalar, ya que aquí se ha traído este tema, y no es una polémica con el señor senador por Mendoza...

Sr. Frugoli. — Si hubiera pensado que se iba a crear este debate no hubiera hecho la observación. La hice desde el punto de vista económico. No cuestiono la soberanía política del Estado para tomar la decisión. No cuestiono el espíritu patriótico que animó al gobierno radical. Sencillamente hubo un egreso muy grande de divisas y fuga de capitales, de acuerdo con las cifras del balance de pagos que tengo en mi poder.

Sr. Perette. — Señor senador: le voy a demostrar cómo el propio gobierno de los Estados Unidos de América terminó pidiendo que la Argentina fuera la sede de la reunión de la OEA y de la de todos los presidentes de los países de América, precisamente por lo que representaba como defensa del patrimonio nacional y como garantía democrática para todos los países de Latinoamérica.

Pero no lo hago en tono polémico, porque sabe el señor senador que lo escucho con gran gusto y sé también de su elocuencia, pero sus afirmaciones, que no son una acusación, obligan...

Sr. Presidente (García, A. A.). — Señor senador: le ruego dirigirse a la Presidencia.

Sr. Perette. — Señor presidente: le ruego me excuse, pero se afirman cosas que tienen que quedar documentadas.

Fijense, señores senadores, que a mí me correspondió representar al país en los Estados Unidos de América, como vicepresidente de la República, cuando la muerte de John Kennedy, en un doloroso episodio de la vida universal.

Así es que se constató que justo al llegar Kennedy a Dallas, donde fue asesinado, se exhibían carteles, profusamente distribuidos, en los cuales el mismo día 22 de noviembre de 1963 se lo acusaba de seguir prestando ayuda económica a la Argentina después de la nulidad de los contratos de petróleo.

Estas no son palabras mías. Figuran en la página 294 del informe oficial de la Comisión Warren, que investigó el asesinato de John Kennedy.

Se desató también una gran campaña, interna y externa, contra la República por esta nulidad de los contratos de petróleo. Y voy a contar aquí un episodio que no lo he narrado nunca.

En esa oportunidad, cuando fui a los Estados Unidos de América, como dije, con motivo de la muerte de John Kennedy, después del sepelio, a los tres días, fui invitado al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estaban presentes Dean Rusk, Averell Harriman y todos los asesores de América latina. Después de los saludos protocolares, Dean Rusk me planteó concretamente que los Estados Unidos necesitaba que quedara sin efecto la nulidad de los contratos de petróleo.

Le rebatí, en aquella oportunidad, punto por punto los argumentos energéticos, económicos, de tipo financiero y jurídico que demostraban

la justicia de nuestra actitud. Como insistía, le demostré cómo las empresas norteamericanas sostenían en los Estados Unidos que habían pagado impuestos en la Argentina mientras que en nuestro país se dictaba un decreto por el cual se las exoneraba de esa obligación; es decir, defraudaban a los argentinos y también a los norteamericanos.

Luego de una serie de argumentos, terminé diciéndole: yo he venido en nombre del gobierno argentino para ser solidario con este país y expresar nuestra fraternal solidaridad frente a la angustia que provoca la muerte de John Kennedy, pero no a confundir el féretro de Kennedy con los pozos de petróleo.

Sostuve que hemos ejercido un acto de plenipotencia y soberanía económica, jurídica y energéticamente que hace a la justicia de nuestra patria.

Es decir, señor presidente, que esta nulidad de los contratos de petróleo dio lugar a una serie de hechos y episodios reveladores de la manera como se manejaban los grandes intereses y pudimos demostrar que nuestra nulidad no podía determinar una evasión de capitales, por cuanto en última instancia sometíamos el proceso al Poder Judicial, cuya Corte Suprema estaba integrada por hombres de vinculación ideológica distinta a la de los hombres de nuestro gobierno.

Además demostramos cómo se habían elaborado los contratos al margen del Congreso, cómo se pagaba lo que no se debía por el petróleo extraído. Todo esto revela de qué forma nos hemos conducido en esta materia.

También podría citar en este momento una serie de antecedentes que demuestran de qué manera se manejó nuestra política económica. Cito al respecto solo dos datos: en el sector externo los saldos favorables de la balanza de pagos y una política soberana en materia económica determinaron que la deuda externa total disminuyera de 3.390 millones de dólares en 1963 a 2.650 millones de dólares a fines de 1965, lo que implicaba una disminución neta de 740 millones de dólares, con el consecuente decrecimiento de la carga de intereses en la economía nacional. Compárese, señor presidente, esta situación con los seis mil millones de dólares de deuda externa que dejó el proceso del régimen militar.

Además, este saneamiento externo, y este es otro dato, se logró luego de dieciséis años de continuo deterioro externo, habiéndose conseguido aumentar las reservas monetarias, las que de un saldo negativo de 400 millones de dólares pasaron a un saldo positivo de 100 millones de dólares; es decir que hubo una mejoría neta de 500 millones de dólares en el Banco Central de la República Argentina.

De esta manera, señor presidente, he querido dejar perfectamente establecido, insisto, cómo

las inversiones extranjeras tienen mucho que ver con la seguridad jurídica y con el Estado de derecho.

Es también cierto que en el período 1958 a 1962 se produce una liberación excesiva en el trato al capital extranjero como consecuencia de los convenios con el Fondo Monetario Internacional.

Debo citar un estudio realizado por la revista «Mercado», donde, considerando las 30 primeras empresas de un *ranking* elaborado por la citada revista con las 120 firmas que más facturan en la Argentina, se puede observar que el 49,15 por ciento son estatales, el 41,24 por ciento son empresas privadas extranjeras y el 9,61 por ciento empresas privadas nacionales. Y si la muestra se extendiera a las sesenta principales empresas se haría notar un neto predominio de la empresa extranjera.

Esta ley tiende, señor presidente, a reparar deformaciones que han existido en materia de radicación de capitales extranjeros: se les indican las áreas e inclusive se les tendrán que indicar las zonas del país en beneficio de la descentralización que tanto nos interesa a todos los argentinos.

En materia de hidrocarburos hemos propuesto, y así lo sostenemos, incorporar, entre las actividades prohibidas, la explotación de hidrocarburos y minerales radiactivos, que consideramos fundamental custodiar, con el gas y otros agregados.

No se trata con recelo al capital extranjero. Observen los señores senadores que el capital extranjero podrá actuar en todos los aspectos de la minería, y en la industria no se discrimina si se trata de elaboración de productos terminados o producción de materias primas estratégicas que resulten de una posición de dominio sobre sectores importantes de la pequeña y mediana industria. Habrá que prever las prohibiciones sobre áreas no operables.

En lo relativo a los *royalties* por tecnología, que son el grueso de la remisión al exterior, nuestra representación planteó y plantea un agregado a fin de que, dentro del concepto de utilidad, quedaran incluidas las remesas entre sucursales y casas matrices por aplicación de tecnología, propuesta que fue rechazada alegando que una futura ley reglamentará este aspecto. Se refiere al artículo decimotercero.

Es evidente que las grandes empresas multinacionales no se interesan mucho por los servicios públicos en la actualidad. Les interesa fundamentalmente el aluminio, la petroquímica, el papel de prensa, la soda solvay, es decir, una serie de actividades que les permite realizar la obra de penetración y compenetración que a ellas les preocupa.

El Pacto Andino, como la decisión de Cartagena, deberán determinar igualmente en nuestro

país toda la acción para integrar un nuevo mercado común en Latinoamérica.

Considero, señor presidente, que era necesario hacer un repaso de los efectos de estas empresas multinacionales, lo cual no implica animadversión hacia el capital extranjero útil que venga a asimilarse al esfuerzo nacional, ni negamos lo que los capitales extranjeros hayan podido realizar en la República.

Entendemos, sí, que ésta es una hora en que nadie puede vencer con el sistema del chantaje económico internacional.

Existe una doble respuesta frente a la hora: primero, al capital extranjero, que debe conocer la existencia de una conciencia nacional argentina mancomunada e insobornable en esta materia; y, en segundo lugar, una respuesta al país, al que convocamos a unirse ante cualquier penetración económica que pretenda imponer las garras de las más peligrosas empresas multinacionales.

Un país unido, consciente, compenetrado y celoso de esta defensa es la mejor réplica a esos grandes peligros.

Estoy seguro que nadie osará, desde afuera, arruinar económicamente al país y que nadie en el país tendrá la osadía de permitir que se vuelvan a repetir las graves transgresiones y deformaciones económicas.

Queremos el capital extranjero en las órbitas señaladas, pero más queremos a nuestra patria emancipada. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales, senador Alberto M. Fonrouge.

Sr. García (A. A.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. García (A. A.). — No es mi deseo esta noche, y mucho menos a esta hora, perturbar la reunión de este honorable cuerpo con una discusión de tipo polémico. Pero por haber formado parte de un gobierno que hizo los contratos petroleros —el gobierno que presidió Arturo Frondizi—, quiero simplemente dejar sentadas algunas muy pocas cosas que para mí son categóricamente importantes porque hacen a la decencia y a la administración del gobierno de aquel momento.

En este instante, y a través de las expresiones de algunos de los señores senadores, pareciera que no fue así.

Podrá o no discreparse con una técnica determinada; podrá discreparse con la revolución peruana —que también los hace— o con Yugoslavia o con cualquier otra nación del mundo; podrá discreparse también, en cada uno de los contratos, respecto de los beneficios o perjuicios que ocasionaron o en cuanto a si fueron más o menos leoninos. Este problema de los

contratos ha sido largamente debatido y sigue siéndolo. Yo no deseo esta noche, ni mucho menos, plantear el debate; pero sí quiero hacer la reserva, como hombre perteneciente al gobierno que los hizo, de que estuvieron inspirados en la liberación nacional, y que muchas de las actividades que aquel gobierno realizó fueron razón y causa de su caída posterior y de una conspiración internacional en la cual jugaban los contratos petroleros, la Conferencia de Uruguayana, la posición argentina en Punta del Este, y también el famoso problema de las cartas cubanas, así como muchos otros episodios que el capitalismo internacional, permanentemente, en ese momento, durante otros gobiernos y seguro en éste, urdió, tratando de enfrentarnos en la Argentina, de desacreditarnos y de lograr nuestra desunión en base al pasado o a conflictos supuestos.

Por eso, yo no quiero caer en el error del señor senador Perette de plantear esta situación en los términos en que él lo ha hecho, formulando críticas a los contratos petroleros. Dejo establecida esta reserva porque considero que fueron útiles al país, que mucho de lo que ha sucedido en materia de provisión de gas y de combustibles todavía sigue siendo fruto de aquellos contratos tan vilipendiados, y que si bien es cierto que muchos de ellos requerían revisión, tal medida fue definitivamente contraria al interés nacional, desde nuestro punto de vista. Y reitero que expreso esto sin ánimo polémico en ese aspecto.

Quiero citar un solo hecho más: que en la plataforma del Frente Nacional de aquella época, en el año 1963, cuya fórmula era encabezada por el doctor Solano Lima e integrada por el doctor Sylvestre Begnis, hoy gobernador de Santa Fe por el Frente Justicialista, en lo referente a contratos se sostenía la revisión de los contratos petroleros.

Con estas breves palabras, sin plantear la discusión, que a mi criterio no corresponde —pero que tampoco corresponde, por lealtad mutua entre los bloques, soslayada tangencialmente, para este tipo de imputaciones—, quiero cerrar mis expresiones para dejar a la Cámara continuar con el tratamiento específico de esta ley que es muy importante para el país, para su futuro y para la reconstrucción.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente: entiendo que el señor senador doctor García ha equivocado totalmente mi planteo. En esta oportunidad yo no me he referido al valor o a los perjuicios de los contratos petroleros, sino a la justificación de por qué nosotros los anulamos y por qué eso no desprestigió de ninguna manera al país sino que enalteció nuestro concepto de soberanía.

Con respecto al juzgamiento de esos contratos de petróleo nosotros tenemos una posición juga-

da y definida que está determinada por el propio decreto de nulidad, y le quiero señalar al señor senador, porque yo tampoco quiero entrar en polémica, que esos contratos de petróleo fueron analizados en la Cámara de Diputados de la Nación en el período 1963/1966, y el 90 por ciento de los integrantes de la misma dio su fallo adverso y su enjuiciamiento a dichos contratos.

Pero, vuelvo a repetir, y coincido en que no es éste el instante para debatir este problema, que yo me he referido a la defensa de nuestro gobierno y al porqué de nuestra actitud, y por qué no incidió en el prestigio del país, según mi modesta opinión.

Sr. García (A. A.). — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Perette. — Sí, señor senador.

Sr. García (A. A.). — Quiero pedirle que no sigamos haciendo referencias, porque sus palabras van a traer necesariamente aclaraciones de mi parte. Usted y algunos señores senadores actuantes han dicho mucho más que yo de los contratos y no quisiera tener que seguir entrando en el tema, porque ello va a motivar réplicas de ustedes, réplicas de mi parte y la participación de otros señores senadores. Yo le ruego que demos por terminado el asunto.

Sr. Perette. — Señor presidente: le acepto la interrupción al señor senador y también la sugerencia. Quiero señalar que cuando ese tema tenga que debatirse lo haremos gustosamente en profundidad con todos los sectores, y muy especialmente con el señor senador García.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Superada la situación, si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Fonrouge). — En consideración en particular.

Sr. Pugliese. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Pugliese. — Nosotros queríamos ratificar las objeciones que hicimos en el transcurso del debate en general, algunas de las cuales planteamos en comisión; pero desde ya, si la misma tiene criterio formado con respecto a cada una de estas proposiciones, diré solamente que una de esas objeciones hace a la no inclusión entre las prohibiciones, del artículo 6º, en lo que hace a servicios, de la utilización de los materiales que pudieran servir a la energía nuclear y a los hidrocarburos. Pienso que la comisión tendrá que decir si acepta un agregado, en cuyo caso lo redactaríamos.

Otra objeción es en el punto 7 del artículo 6º, donde se propone suprimir la palabra «ganaderas». Y en el punto 8, la supresión de la preposición que existe después de «pesca».

El artículo 13 es el que establece la remesa de las utilidades al exterior. Nosotros decimos que en estas utilidades tienen que estar comprendidos los envíos en concepto de *royalties* o por aplicación de tecnología.

Estas eran las objeciones fundamentales.

Sr. Allende. — Las objeciones a las que se acaba de referir el señor senador Pugliese fueron oportunamente motivo de diálogo en nuestra comisión. Como miembro informante de la mayoría mantengo el texto tal cual está proyectado en el despacho, y lo hago porque nosotros consideramos que esta iniciativa tiene por objetivo fundamental el control de la inversión extranjera, mientras que su espíritu es mantener la prioridad de lo nacional sobre lo extranjero. Pensamos que dentro de la ley está suficientemente defendido el interés nacional mediante la previsión de la estructura empresarial que se admite para el caso de inversión extranjera, en la clasificación de las empresas en extranjeras, mixtas y nacionales, en los distintos regímenes para autorización por autoridad competente, que debe intervenir en cada caso, y en las prioridades y las limitaciones o prohibiciones que establece el texto. Además, como lo he advertido en mi exposición, la amplitud del ámbito de la esfera económica y del proceso productivo al cual está vinculada la radicación extranjera impide que dentro de la ley se puedan sistematizar todas las reglamentaciones que comprendan las distintas áreas económicas. La ley debe dar pautas generales suficientemente claras y que preserven el patrimonio nacional, sin perjuicio de que ciertas actividades específicas tengan regímenes propios por leyes orgánicas actuales o que oportunamente se dicten, y que no deben estar sometidas a limitaciones por normas específicamente restrictivas o que no admitan ninguna ductilidad dentro de esto que es la ley básica.

Quiero aclarar que el bloque mayoritario al que pertenezco participa del espíritu y de las inquietudes de los señores senadores que han hecho objeciones a la ley, pero considero que los aspectos que dan lugar a tales objeciones están suficientemente defendidos en la previsión del texto legal. Por eso vamos a mantener el despacho de la comisión tal como se encuentra a disposición del Honorable Senado.

Sr. Frugoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Frugoli. — Quiero decir sencillamente que, ante las manifestaciones del señor miembro informante en el sentido de que la comisión no admitirá reformas al proyecto, no voy a formular —sería ocioso hacerlo— algunas objeciones que pensaba hacer a algunos de sus artículos.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Quiero hacer un agregado para abreviar el tratamiento. En nuestras exposiciones hemos señalado las objeciones de tipo particular. Como el señor miembro informante ha señalado que no aceptará modificaciones, y ha dado a la ley el carácter de interpretación, nosotros consideramos ya hechas nuestras observaciones, de modo que no haremos un nuevo análisis ni una propuesta de tipo particular. Debo advertir que nuestro silencio en la votación en particular tiene el sentido de reiteración de las objeciones antes formuladas.

Nada más.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Se va a votar en particular.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 1º a 36 del proyecto de ley (1).

—El artículo 37 es de forma.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Con las modificaciones introducidas, vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.

19

PREFERENCIA

Sr. Perette. — Solicito que en el día de mañana se trate el proyecto de paralización de juicios de ejecución hipotecaria y créditos provenientes de obligaciones vinculadas con entidades parabancarias cuando el acreedor se encuentre sometido a proceso penal.

Para el tratamiento de este asunto considero que existe coincidencia, porque interesa a importantes sectores de la población.

Sr. Martiarena. — Aceptamos la propuesta del señor senador.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Entre Ríos.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Queda fijada la preferencia.

20

CUARTO INTERMEDIO

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Hago moción para pasar a cuarto intermedio hasta luego a las 9 y 30, y que a continuación de esta sesión se pase a reunión secreta.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Se va a votar la moción del señor senador Martiarena.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Invito al Honorable Senado a pasar a cuarto intermedio.

—Es la hora 1 y 17 del día 1º de septiembre de 1973.

ADOLFO STRASBERG.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.